



UNIVERSIDAD DE CHILE
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN
ESCUELA DE PERIODISMO

A la espera de la reconstrucción

El día a día de los damnificados del terremoto de 2010

Memoria para optar al título de Periodista

NICOLE ANDREA VALERIA GUTIÉRREZ

Profesora guía:

MARÍA OLIVIA MÖNCKEBERG PARDO

Santiago de Chile

Enero de 2014

ÍNDICE

RESUMEN	4
INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I.....	9
Terremoto en Chile, una catástrofe natural y social.....	9
Desastrosas confusiones.....	13
Devastador panorama del amanecer	16
Saqueos reales y hordas imaginarias	17
Cuantificando las pérdidas	20
Los más vulnerables, los más afectados	22
Terremoto al empleo	25
CAPÍTULO II.....	28
Soluciones de emergencia.....	28
Recuerdos de los primeros días después de la tragedia.....	30
Campamentos, el último recurso	34
CAPÍTULO III.....	38
Chile Unido ¿Reconstruye Mejor?.....	38
Flexibilizando los mismos instrumentos.....	43
El registro de damnificados	44
Reparando errores estatales.....	45
Atención a Aldeas	47
Reconstrucción del adobe y borde costero.....	49
CAPÍTULO IV	53
Vida de Campamento	53
La pérdida del espacio privado	58
Una condición difícil de aceptar	60
Rodeados de carencias	69
La estación más dura.....	72
“Distintos tipos de gente”	75
María Garrido en El Molino.....	77

Líder innata.....	78
Sus esperanzas.....	80
Villa Futuro, en el saco de los damnificados.....	82
CAPÍTULO V	87
Una oportunidad que se dejó pasar	87
La iniciativa de medios locales e independientes	91
Velando por una reconstrucción Justa	97
Los privados, protagonistas de la reconstrucción	102
El sueño de la casa propia	106
La lentitud del proceso.....	108
Pérdida de confianza	112
Reconstrucción parcial.....	115
Liderazgos amenazadores	119
La vivienda adecuada.....	123
Modelo de exportación.....	125
CAPÍTULO VI	129
A cuatro años del terremoto: El balance de la ciudadanía	129
Aún quedan tareas pendientes	131
CAPÍTULO VII	133
Lecciones y desafíos	133
Aprender de la experiencia.....	136
ENTREVISTADOS	140
BIBLIOGRAFÍA	145
ANEXOS	151

RESUMEN

La Memoria titulada “A la espera de la reconstrucción. El día a día de los damnificados del terremoto de 2010” es una investigación periodística que ahonda en las condiciones de vida de los más afectados por el terremoto y tsunami del 27 de febrero, y profundiza en los desafíos que impuso el proceso de reconstrucción al país y sus autoridades.

Para comprender la magnitud de la catástrofe y el marco regulatorio desde donde el Estado planteó las soluciones, se incluye un breve recuento de lo ocurrido durante las primeras horas de la catástrofe; las reacciones de las autoridades de la época; el surgimiento de las primeras ayudas y la creación del Plan de Reconstrucción Nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), denominado *Chile Unido Reconstruye Mejor*.

A través de los testimonios de personas damnificadas es posible conocer los principales problemas que enfrentan, o enfrentaron los residentes de las aldeas; sus tristezas, anhelos, esperanzas y opiniones respecto del proceso diseñado y ejecutado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Emanada desde organizaciones civiles y de los propios afectados, se incluye una crítica evaluación al modelo de reconstrucción, para finalmente conocer el balance, lecciones y desafíos de este proceso, cuatro años después de ocurrida la tragedia.

INTRODUCCIÓN

La particular geografía del territorio nacional y su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, la zona más símica del planeta, hacen que la historia de Chile esté marcada por la ocurrencia de devastadores desastres naturales, que constantemente obligan a sus autoridades y habitantes a sobreponerse ante la adversidad y reconstruir sus localidades.

Solo durante el siglo XX se registraron 75 sismos de más de 7 grados en el país¹, entre ellos, el mayor terremoto en la historia de la humanidad que ocurrió en Valdivia el 22 de mayo de 1960, y cuya intensidad fue de 9,6 grados Richter.

A pesar de que probablemente cada una de las generaciones de chilenos han vivido, o vivirán un terremoto, la madrugada del 27 de febrero de 2010 tomó a todos por sorpresa.

Los 8.8 grados Richter y el posterior tsunami que azotó a las localidades costeras del centro y sur del país encontraron una nación desprevenida, *ad portas* de un cambio de gobierno y donde las autoridades e instituciones encargadas de la protección civil, no fueron capaces de responder ante la magnitud de la tragedia, entregando información errónea en el momento en que miles de

¹ Estadísticas del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

personas dependían de esta para el resguardo de su integridad física y en definitiva, de sus vidas.

Solo el amanecer de aquel 27 de febrero comenzaría a dar señales de la dimensión del desastre. La luz del sol reveló un Chile devastado en el que decenas de ciudades y pueblos fueron doblemente golpeados por la fuerza de la naturaleza; un terremoto y tsunami que cambió drásticamente la vida de miles, que significó la muerte de 521 personas², y que de paso, en tan sólo 3 minutos, arrancó de raíz la meta: Chile 2010 un “País sin Campamentos”.

Las caóticas escenas que se vieron los días posteriores a la catástrofe estuvieron marcadas por los saqueos producidos en el Gran Concepción; barrios protegiéndose de hordas que su mayoría fueron imaginarias, aunque también el país fue testigo de la movilización de miles de chilenos que acudieron en ayuda de los más afectados.

Después, con la cooperación ciudadana comenzaron a llegar desde diversos organismos las soluciones de emergencia; así, miles de familias que perdieron sus hogares esperaron en una carpa la instalación de lo que sería su nuevo hogar: una mediagua de 18 metros cuadrados.

² Subsecretaría del Interior, Chile (2013) *Informe final de fallecidos y desaparecidos por comuna*. [en línea] <http://www.interior.gob.cl/filesapp/listado_fallecidos_desaparecidos_27Feb.pdf> [consulta: 2 de agosto de 2013]

La entrega de estas “viviendas de emergencia” fue una de las primeras medidas tomadas por el recién asumido gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en Chile se instalaron cerca de 80 mil mediaguas. De estas 4 mil 350 fueron situadas en 107 aldeas de emergencia, concentradas en las regiones de Maule y Bío-Bío, a la espera de lo que sería una solución definitiva.

Con dificultad para acceder a los servicios básicos, como el agua potable o un baño al interior de la casa; una constante sensación de inseguridad, de pérdida del espacio privado y de la mayor parte de su patrimonio, los damnificados han tenido que enfrentar y aguardar un proceso de reconstrucción que se anunciaba ágil pero que tardó mucho más de lo imaginado en llegar.

Un modelo que se promovía como una oportunidad para Chile terminó por generar constantes cuestionamientos, no solo de quienes viven día a día la tragedia, sino también, de organismos ciudadanos que ávidos de participar, ven con preocupación el excesivo protagonismo del sector empresarial privado, en desmedro de su propia contribución en la reconstrucción.

En un recorrido por distintas ciudades de las regiones de Maule y Bío- Bío, entre ellas, Talca, Constitución, Dichato y Talcahuano, por mencionar algunas, se recabó una serie de testimonios de personas que se vieron afectadas por el terremoto y tsunami.

Por medio de entrevistas en profundidad, realizadas en terreno y con un enfoque explicativo y testimonial se intenta dar cuenta de las condiciones en las que han vivido los afectados del 27/F a la espera de la reconstrucción.

Una de las particularidades de esta Memoria de Título es que retrata en su mayoría testimonios de mujeres, quienes a lo largo del recorrido por las distintas aldeas y comunas; eran líderes de sus comunidades y se mostraban más dispuestas a contar sus problemas y necesidades.

¿Cuáles han sido las principales dificultades que han enfrentado las víctimas del desastre durante su estadía en las aldeas de emergencia?; ¿Cómo han visto afectados sus derechos fundamentales?; ¿Cuáles son sus anhelos y esperanzas?

Estas y otras interrogantes son abordadas en la siguiente investigación periodística que durante dos años conoció la percepción, sentimientos y deseos de los damnificados, profundizando en las rutinas de quienes residen en las “aldeas de emergencia” y recogiendo un crítico diagnóstico desde las organizaciones sociales.

Todos estos puntos desembocan en una revisión de los problemas que día a día aún enfrentan los principales protagonistas del proceso de reconstrucción nacional.

CAPÍTULO I

Terremoto en Chile, una catástrofe natural y social

Un fuerte ruido subterráneo fue la única señal de que algo estaba por venir. Un estruendo que a pesar de su intensidad no alcanzó a advertir a los chilenos. Eran las 3:34 de la madrugada del 27 de febrero de 2010 y de pronto, como si la tierra se enfureciera con este rincón del mundo, comenzó un brusco movimiento que despertó de golpe a millones de personas.

Aracelli Contreras³ dormía en su casa junto a sus hijas y una sobrina. Residente de la ciudad de Constitución, el terremoto, como a la mayoría de los chilenos, también la encontró desprevenida. Su vivienda estaba ubicada frente a la desembocadura del río Maule, a metros del mar y frente a Isla Orrego.

Para ella era una noche tranquila, marcada por la realización de la tradicional “Fiesta Veneciana”; que conmemora la finalización de la temporada estival y atraía a cientos de turistas.

Sin embargo, a las 3:34 esta serenidad se vio interrumpida, el fuerte sismo la sacó de golpe de la cama y la obligó a huir de su casa junto a su familia.

³ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Aracelli Contreras, damnificada residente en Aldea La Poza de Constitución. Diciembre de 2011.

Aracelli señala: “Arrancamos esa noche, no nos pudimos ir por Montt- una de las calles principales de la ciudad- porque el centro de Constitución era todo de adobe. Ahí nos fuimos a la cruz del Calvario, ese era nuestro destino, pues desde hace muchos años se hablaba de que esto iba a venir y lo único que teníamos que hacer era correr al cerro”.

Una de las cosas más impactantes para ella fue haber escuchado todo lo que pasaba en Isla Orrego. “Lo único que podíamos hacer era salir corriendo, no podía devolverme ni ir a buscar ayuda, era nuestra vida o la de ellos. Esa noche fue infernal”, recuerda.

Mientras Aracelli aguardaba en los cerros, en otra de las localidades duramente azotadas por la naturaleza, Dichato, se encontraba María Garrido⁴, intentando salir de la casa que habitaban junto a sus hijos y esposo, quien se resistía a dejar la vivienda.

María recuerda que se les cerraron puertas y ventanas: “Lo primero que hice fue salir a mirar, me tiré para afuera y el patio ya estaba lleno de agua. Entré como pude a la casa y en ese intento una de las ventanas me tomó el brazo. Le coloqué los zapatos a mi viejito –se refiere a su marido- y partimos para arriba. La

⁴ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a María Garrido, damnificada residente en Aldea El Molino de Dichato. Abril de 2013.

tierra se abría y cerraba, los postes de luz se caían, estaba la *escoba*⁵. Caminamos como dos kilómetros, sin luz, sin nada, fue; horrible”, indica María.

El panorama era caótico y no solo en el borde costero. En la localidad de Quile, ubicada al noreste de Cobquecura, región del Bío- Bío, dormía Segundo Jara⁶. A unos metros de su casa vivían su hermana Matilde y su cuñado Edmundo Suazo de 81 y 78 años, respectivamente.

Segundo, refleja en su cara el paso de los años. Él también es de edad avanzada. Vive casi alejado de la civilización, al interior de un cerro muy cercano a la comuna de Cobquecura.

Recorre la parte posterior de su terreno, mostrando los escombros de lo que antes era la casa de su hermana y cuñado. Durante su caminata, recuerda cómo vivió aquella noche: “Después de que pasó el terremoto vine a verlos, estaban vivos los dos. Llegué, les hablé y ‘*el Mundo*’ –apodo con el que nombraba a su cuñado- me pidió que lo sacara, pero no fui capaz, estaba muy aplastado. Entonces me fui para arriba donde la vecina, para que viniéramos a ayudarlos pero solo pudimos sacar a mi hermana porque ella tenía una pierna aplastada no más, él estaba con adobe y palos encima. Fue muy grande el impacto de no haber podido ayudarlo”. Edmundo Suazo falleció en el lugar.

⁵ Término utilizado para describir una situación caótica.

⁶ Entrevista realizada Segundo Jara, para el reportaje “Los Muertos Olvidados de Ñuble” publicado en *diario La Discusión de Chillán*. Febrero 2011. Entrevistador: Nicole Valeria.

Mientras Segundo Jara veía fallecer a su cuñado, en Penco, María Gabriela Torrealba⁷ se encontraba en *shock* sin poder reaccionar ante la magnitud del movimiento. Vivía junto a su pareja y a su hijo, un joven con discapacidad que no pudo ponerse de pie por sí mismo. Con voz temblorosa y los ojos vidriosos, María Gabriela recuerda con gran pesar que aquella noche les costó mucho mover a su hijo y cuando al fin lograron salir de su hogar, vio cómo todos sus vecinos se dirigían al cerro.

Para el terremoto de 1960 el mar los había golpeado: “Todos tenían en la mente que debían arrancar a los cerros aunque por la radio avisaron que no pasaba nada”, comenta Gabriela Torrealba, quien con una frazada y un poco de ropa, subió a la parte alta de la ciudad junto a su familia.

Unas cuadras más hacia la costa vivía Jacqueline Torres⁸. Con alivio comenta cómo una vez que la tierra se calmó, comenzaron a abandonar sus hogares para resguardarse en una zona segura. Estando en un lugar alto fue testigo de una imagen que quedará grabada para siempre en su memoria: “Estábamos todos arriba cuando comenzamos a ver cómo el mar subía, acá hay un muelle que empezó a llenarse hasta que no se vio más, después se escuchó un estruendo, como que se estaban destruyendo y demoliendo latas. El mar traía

⁷ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a María Graciela Torrealba, damnificada, residente de Penco. Diciembre de 2011.

⁸ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Jacqueline Torres, damnificada, residente de aldea Coihueco de Penco. Diciembre de 2011.

y botaba cosas, todos llorábamos, al ver el muelle sumergido pensábamos en cómo estarían nuestras casas”.

Tal cual lo hicieron estas personas, la mayor parte de la población recurrió a la sabiduría popular, esa experiencia acumulada por años que les permitió enfrentar el cataclismo y salvar su vida y la de sus familias.

Afortunadamente, aquella noche fueron muy pocas las personas que hicieron caso a los procedimientos y recomendaciones emitidos por la autoridad, que dio muestra de no estar preparada para responder a una tragedia como la que estaba sucediendo.

Desastrosas confusiones

Mientras miles de chilenos eran testigos de cómo el mar se llevaba sus hogares, desde la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) la ahora reelecta Presidenta Michelle Bachelet descartaba el riesgo de tsunami ante toda la nación.

Las primeras horas de la tragedia desnudaron al Chile real, ese país que aspira al desarrollo y que sin embargo, no pudo garantizar la seguridad de sus habitantes.

¿Qué pasó aquella madrugada? A pesar de que Chile cuenta con un Plan Nacional de Protección Civil, esa noche falló la coordinación entre los distintos organismos encargados de hacer frente a una emergencia.

Basado en el Artículo 1° de la Constitución Política de Chile de 1980, que establece “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia” una de las principales funciones del Plan Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es brindar protección a las personas, sus bienes y ambiente ante una situación de riesgo colectivo, sea éste de origen natural o generado por la actividad humana.

Esta protección debe ser ejercida en nuestro país por un sistema integrado de organismos, servicios e instituciones del sector público y privado, incluyendo a las entidades de carácter voluntario y a la comunidad organizada, bajo la coordinación de la Onemi.

El Plan Nacional estipula las responsabilidades y roles de los organismos y autoridades que intervienen en una emergencia, estableciendo la existencia de tres tipos de mando; el mando técnico que determina las respuestas para controlar la emergencia, el mando de coordinación; que permite la aplicación de esa respuesta, si el mando técnico no puede concretarla, y el mando de autoridad que asume la vocería y facilita las respuestas ante la emergencia a través del uso de las normas y leyes vigentes. Este último debe ser ejercido por las autoridades políticas del país.

La noche del 27 de febrero el mando técnico era representado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, (SHOA) que debía determinar y emitir la alerta de tsunami; el mando de coordinación era ejercido por la Onemi que debía garantizar los canales de emisión de esta, mientras que el ministro del Interior y la Presidenta de la República debían comunicar lo informado por el mando técnico y el de coordinación.

Según la investigación "*Tsunami paso a paso: los escandalosos errores y omisiones del SHOA y la Onemi*"⁹, publicada por el diario electrónico Ciper Chile, esa madrugada hubo una serie de irreparables errores entre los mandos técnicos de coordinación y de autoridades. Tal como explican sus autores, "en Valparaíso, los marinos del SHOA mantuvieron la cancelación de la alarma de tsunami pese a que la oceanógrafa de turno les advirtió del peligro de 'olas destructivas'. En Santiago, funcionarios de la Onemi supieron que una ola había devastado Juan Fernández y no dieron aviso".

El 27 de febrero las autoridades técnicas y políticas continuaron absortas en la confusión y mientras comunicaban al país que no había riesgo de tsunami, miles de personas en el borde costero del centro sur de Chile se enfrentaban a olas de seis metros en una de las que sería las peores catástrofes naturales en la historia de esta nación.

⁹ Ciper Chile, *Tsunami paso a paso: los escandalosos errores y omisiones del SHOA y la Onemi*. Jorge Aliaga y Pedro Ramírez, 18 de enero de 2011.

Devastador panorama del amanecer

El recuerdo de esa noche permanece intacto en la mente de muchas personas que, muy a su pesar, fueron observadores privilegiados de la fuerza de la naturaleza. Uno de ellos es Ricardo Ruz¹⁰, habitante de Dichato, quien recuerda: “Hicimos la evacuación con éxito, llegamos al cerro y ahí nos pusimos como en platea. Había una luna llena roja, hermosa, grande y mucha luz. De repente se veía cómo se estaba recogiendo el agua. El maremoto empezó inmediatamente después del terremoto a modo de marejadas, pero al rato vino una ola, luego otra y finalmente la tercera que fue la más grande. Por lo menos tiene que haber tenido unos 14 o 15 metros porque cubrió la casa de dos pisos”.

Fueron los primeros rayos de sol los que comenzaron a dar señales de la magnitud de la tragedia. Mientras las autoridades políticas y técnicas del país continuaban sin tener certeza de lo que estaba ocurriendo, los chilenos apostados en los cerros eran los primeros en conocer las consecuencias.

El maremoto causó gran devastación en la zona costera de las regiones de Maule y Bío-Bío. Ciudades como Talcahuano, Concepción y Constitución quedaron gravemente afectadas. Esto sin contar la debacle que se produjo en pueblos como Dichato, Iloca, Pelluhue y Curanipe, que prácticamente desaparecieron.

¹⁰ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Ricardo Ruz, residente de Dichato febrero de 2013.

Ante el desastre, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Michelle Bachelet fue decretar estado de catástrofe en las regiones de Maule y Bío-Bío.

Saqueos reales y hordas imaginarias

El amanecer no solo permitió conocer la magnitud de los daños. Con la falla en las comunicaciones, la interrupción de los servicios básicos y gran parte de la infraestructura pública y privada en el suelo, un segmento de la población afectada salió a las calles a saquear supermercados, tiendas y bodegas, lo que requirió la intervención del Ejército y la disposición del toque de queda en algunas ciudades.

Según la investigación *“Entendiendo el comportamiento cívico pos terremoto”*, realizada por Héctor Ormeño (2010), economista de la Universidad de Santiago, “(...) los daños menores a las viviendas como consecuencia del terremoto tienen un efecto positivo en robos y saqueos”. El autor plantea que la pobreza sería una de las variables que determina el quiebre de contrato social, por lo que son las personas más vulnerables quienes, para poder subsistir, están más propensas a abandonar las cláusulas invisibles de este contrato, sustentado en que la sociedad y sus instituciones los han dejado fuera del desarrollo.

Sin embargo, lo que durante esos días dejó a todo Chile atónito fue el aprovechamiento de algunas personas quienes salían de las tiendas desvalijadas,

con artículos electrónicos, muebles y un sinnúmero de productos que poco y nada ayudarían en la emergencia.

En la conversación sostenida en diciembre de 2011, en Constitución, Aracelli Contreras¹¹, confiesa con un poco de culpa que, en aquellos momentos, ante el temor del desabastecimiento y la incertidumbre que generaba la incomunicación, ella misma fue parte de estos saqueos. “Pensamos que no iba a haber nada”, afirma avergonzada.

En tanto, Nancy Gutiérrez, habitante de la comuna de Penco, recuerda cómo su marido se vio afectado por el pillaje. “Mi esposo era repartidor de la CCU¹² y después del terremoto, la primera vez que salieron a repartir, les robaron todo, no le dejaron ni rueda a los cambiones”, comenta.

El caos de los primeros días generó gran temor en la población al punto de que los vecinos de las ciudades más golpeadas se organizaron para proteger sus barrios ante lo que para ellos era un saqueo inminente.

La desesperación y el miedo generados en los días posteriores al terremoto originaron cierta histeria colectiva en distintos sectores de la ciudad, donde sus habitantes hacían rondas para defender el territorio.

¹¹ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Aracelli Contreras, damnificada residente en Aldea La Poza de Constitución. Diciembre de 2011.

¹² Compañías Cerveceras Unidas (CCU)

Un caso distinto ocurrió en la ciudad de Talca, a pesar de ser una de las más dañadas por el terremoto, allí no se produjeron saqueos. En palabras de Francisco Letelier¹³, sociólogo y miembro de la ONG Surmaule¹⁴, “esto se debe a la escala urbana y la matriz rural de su población, en la que más bien primó en la solidaridad y el respeto mutuo”.

Ante la catástrofe las autoridades y comunidades locales tuvieron que asumir los nuevos desafíos generados por el terremoto. Tal como plantea el *Informe Anual de ONU Hábitat*, de 2010, esta tarea debieron enfrentarla con “pocos o insuficientes recursos, falta de estrategias, capacidades operativas y técnicas”.

A estas falencias se sumó una agravante para la población; el terremoto ocurrió solo a once días del cambio de gobierno, cuando las nuevas autoridades, pertenecientes a la derecha política, asumieron con poco conocimiento del aparato estatal los retos y desafíos que implicaría la reconstrucción.

¹³ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Francisco Letelier. Talca. Mayo 2012.

¹⁴ Surmaule es una organización autónoma de la sociedad civil, conformada por un equipo multidisciplinario que, a través de su trabajo, busca acortar la brecha existente entre la sociedad civil y los organismos del Estado, fortaleciendo el ejercicio de la ciudadanía y la incidencia ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Ha tenido una importante participación en la ciudad de Talca y a nivel nacional en la generación de propuestas en materia de reconstrucción.

Cuantificando las pérdidas

El terremoto del 27 de febrero de 2010 es conocido como el sexto más grande de la historia universal. Afectó a seis regiones del país, desde Valparaíso a La Araucanía y sus graves consecuencias radican en que en esta zona residen cerca de 13 millones de personas, es decir, casi el 80 por ciento de la población de Chile.

Según indica el Plan de Reconstrucción Nacional, en su versión de agosto de 2010, junto al terremoto de 1939 en Chillán, el sismo de 2010 es el que ha producido un mayor daño en el ámbito vivienda.

El movimiento fue seguido por un destructivo tsunami que arrasó con las costas de Chile en una extensión de 700 kilómetros. Entre las áreas más afectadas por el maremoto se encuentran las regiones de O'Higgins, Maule y Bio-Bío.

Las primeras cifras que pretendían cuantificar la tragedia fueron entregadas por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Durante esos días la prioridad fue tener la cantidad exacta de personas fallecidas y saber cuál era el estado de la infraestructura pública y privada.

Sin embargo, después del 11 de marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera asumió la Presidencia de la República, comenzaron a aparecer las cifras que permitirían dimensionar la catástrofe.

Según las estadísticas del Gobierno de Chile, más de 900 pueblos y comunidades rurales y costeras resultaron afectadas por el terremoto. Según declaraciones del propio Sebastián Piñera, para recuperar todos los daños se necesitarían 30 mil millones de dólares, lo que equivale al 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Estos datos indican, además, que esa noche fallecieron 521 personas y otras 56 aún se encuentran desaparecidas. En términos materiales 370 mil viviendas resultaron destruidas o dañadas; el 71 por ciento de la red hospitalaria se vio afectada. Lo mismo ocurrió con 6 mil 168 establecimientos educacionales.

Las pérdidas se concentraron en zonas patrimoniales típicas de adobe y en el borde costero, lo que también perjudicó a importantes industrias como la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), con su siderúrgica Huachipato, Vidrios Lirquén, Celulosa Arauco planta Constitución y algunas centrales termoeléctricas.

Según el *informe final de la comisión investigadora sobre el proceso de reconstrucción nacional* de la Cámara de Diputados, 32 caletas pesqueras resultaron dañadas desde la región de Valparaíso hasta La Araucanía, afectando alrededor de 15 mil pescadores artesanales.

Pero las familias de las zonas costeras no solo perdieron sus viviendas sino que también, en mucho de los casos, sus fuentes de empleo, insumos, materias primas y medios de vida, quedando con pocas posibilidades de recuperarse. El mayor porcentaje de personas afectadas está en las regiones del Maule con un 20,7 por ciento y Bio-Bío con un 17,8 por ciento.

Los más vulnerables, los más afectados

El terremoto no impactó a todos por igual. Según el estudio *“Efectos en la calidad de vida de la población afectada por el terremoto/tsunami”* del Ministerio de Desarrollo Social y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2010, la población más golpeada fue la de menores ingresos. En las seis regiones afectadas, el 12 por ciento de las personas del quintil¹⁵ más pobre experimentó daño mayor o destrucción de la vivienda, versus el 4,6 por ciento del quintil más rico.

Si se considera las dos regiones más golpeadas por el terremoto y tsunami, la población afectada del quintil de menores ingresos alcanza un 26,3 por ciento en la Región del Maule y un 25,4 por ciento en la Región del Bío-Bío.

¹⁵ Según indica el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile, los quintiles de ingreso son una forma de clasificar a los hogares de una determinada población según sus ingresos. Cada quintil corresponde a la quinta parte o 20% de los hogares ordenados en forma ascendente de acuerdo al ingreso autónomo per cápita del hogar, donde el primer (Quintil I) representa el 20% más pobre de los hogares y el quinto quintil (Quintil V) el 20% más rico de estos hogares.

Este mayor daño se explica porque las personas más pobres residen en viviendas más precarias o habitan localidades sujetas a mayor riesgo. El terremoto dejó en evidencia que los pobres no solo tienen escasos ingresos, sino que están más expuestos a experimentar los efectos adversos de los desastres naturales.

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), a lo largo del tiempo los desastres han demostrado que los daños sociales generados son más significativos cuando ocurren en los países en vías de desarrollo. Esto, ya que afectan en mayor medida a la población más pobre y vulnerable.

Dentro de las principales consecuencias de los desastres naturales que identifica la Cepal, se encuentran: daños en la infraestructura económica y social, alteraciones ambientales, cambios en las prioridades de desarrollo, desequilibrios fiscales, incremento de precios e incluso modificaciones en la estructura demográfica.

No obstante, el impacto más comprometedor corresponde al deterioro de las condiciones de vida de la población. Según el organismo, “en muchos casos la reconstrucción se lleva a cabo sin que se reduzca la vulnerabilidad. Dicho de manera directa, la vulnerabilidad se reconstruye en vez de aminorarse”.

Los datos anteriores concuerdan con las cifras de la Encuesta Familiar Única de Emergencia (EFU), aplicada después del sismo por el Ministerio de Desarrollo Social. Esta arrojó como resultados que un 83 por ciento de las familias

que habitaban viviendas destruidas por el terremoto, pertenecía antes de la catástrofe, a los dos quintiles de menores ingresos. El número aumenta a un 93 por ciento si se incluye el tercer quintil.

En Chile después del terremoto fue precisamente el sector más vulnerable de la población el que sufrió las consecuencias. Fueron quienes pertenecen a ese segmento los que perdieron sus casas, el acceso a los servicios básicos y vieron modificadas drásticamente sus condiciones de vida.

El 40 por ciento de las personas con menores ingresos de las regiones de Maule y Bío-Bío resultaron más afectadas; de ellas, un 10 por ciento terminó con su vivienda destruida o con daños mayores.

Según el mismo informe del PNUD y Mideplan (2010) después del terremoto se produjo un aumento de la pobreza de tres puntos porcentuales, desde un 16,4 a un 19,4 por ciento.

Otra arista que reveló este documento, es que después del 27 de febrero de 2010 una cantidad significativa de personas tuvo un nivel de impacto psicosocial o emocional importante. Y son las mujeres quienes lo manifestaron en mayor medida.

Según Yasna Schleyer¹⁶, psicóloga de la Universidad de Concepción, quien durante 2010 trabajó en el Centro de Salud Familiar Bellavista de Tomé, los problemas más frecuentes que pudo ver fueron depresión y ansiedad, experimentados principalmente por mujeres, sobre todo aquellas con antecedentes previos de estas enfermedades.

Terremoto al empleo

Entre las pérdidas post terremoto y tsunami se cuenta la desaparición de fuentes de trabajo. En términos generales, fueron las comunas costeras las que se vieron más afectadas, dado que las áreas más impactadas por el terremoto y tsunami fueron la pesca extractiva y el turismo de las regiones de Maule y Bío-Bío.

Otro aporte en cuanto a cifras lo realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que en su informe del trimestre móvil febrero- abril de 2010, comunicó la pérdida de 45 mil 500 puestos de trabajo, como consecuencia de esta catástrofe natural.

De acuerdo al estudio *“El Impacto del terremoto sobre el empleo”*, elaborado por la Oficina Internacional del trabajo (OIT) en 2010, el rubro más

¹⁶ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Yasna Schleyer, psicóloga Universidad de Concepción. Santiago. Septiembre de 2013.

dañado por el terremoto fue el pesquero ya que muchos trabajadores además de perder todos sus implementos laborales, quedaron sin casa.

El comercio también se vio duramente golpeado, sobre todo por los posteriores saqueos que se produjeron en algunas ciudades del país. Asimismo, las ramas agrícolas y forestales debieron paralizar sus actividades por problemas de conectividad.

Uno de los datos relevantes del estudio de la OIT es el aumento de la tasa de desempleo femenino. Rosa Pastén es una de las mujeres que tras el tsunami quedó sin trabajo. Residente de la aldea Rocuant en Talcahuano, hasta antes del terremoto se desempeñaba como vendedora en una librería de esa comuna. La madrugada del 27 de febrero el tsunami arrasó con su fuente laboral.

Rosita, como la apodan sus amigos, cuenta cómo se vio afectada: “Yo trabajaba en la librería *El lapicito* de Talcahuano, pero después del terremoto quedé cesante, como una persona indigente, sin trabajo y sin casa”¹⁷.

En Dichato, Ramona Parra¹⁸, quien bordea los 70 años narra que su nieto, con quien vivía, perdió su fuente laboral. “Yo me fui a Dichato porque no tenía con quien vivir y él se quedó sufriendo todas las penitencias, a veces no tenía ni qué

¹⁷ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Rosa Pastén, damnificada residente en Aldea Rocuant de Talcahuano. Diciembre de 2012.

¹⁸ Entrevista realizada para esta Memoria de a Ramona Parra, damnificada residente aldea El Molino de Dichato. Marzo 2013

comer, andaba todo sucio, era terrible, él sufrió más, yo estaba bien porque estaba en una casa con todas las comodidades pero mi nieto la sufrió bastante”, sostiene Ramona.

Frente a este panorama, que se repetía en todas las regiones afectadas, el desafío de las autoridades fue actuar con la máxima diligencia, no solo para recuperar la productividad del país sino que para dar un techo a los damnificados que *ad portas* de llegar el invierno, aún no tenían un lugar que los cobijara.

La tarea era inmensa; no solo se debían entregar soluciones de emergencia sino que también era necesario diseñar un acabado plan de reconstrucción que garantizara la seguridad de los chilenos, aun de quienes viven en zonas de posible inundación por tsunami.

CAPÍTULO II

Soluciones de emergencia

El terremoto implicó que los damnificados abandonaran sus hogares sin conocer cuál sería su destino. Algunos pudieron trasladarse a casas de familiares, amigos o incluso cambiarse de ciudad. Sin embargo, los más afectados, aquellos que no tuvieron una red de apoyo a la que acudir se vieron en la obligación de esperar que apareciera algún tipo de ayuda.

Los primeros en movilizarse para colaborar fueron los mismos vecinos, quienes de forma individual u organizada, fueron en ayuda de los más golpeados por la tragedia. Ejemplo de ello fue lo ocurrido en Dichato, donde las primeras donaciones recibidas llegaron por parte de personas de Chillán, quienes durante años veranearon en sus playas.

Noelia Tapia¹⁹ vive en la aldea El Molino de Dichato y cuenta quienes le dieron las primeras ayudas: “Aquí la gente particular se portó muy bien, vinieron los soldados y todo, pero primero estuvieron los particulares, el gobierno se hizo presente después; a fines de abril, principios de mayo empezaron a repartir carpas albergues. También desde Japón nos regalaron ollas, útiles de aseo y frazadas. Casi toda la ayuda que nosotros recibimos fue de externos”, precisó.

¹⁹ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Noelia Tapia, damnificada residente en aldea El Molino de Dichato. Octubre de 2011.

Otro de los hechos que marca este período fue la realización de la campaña “Chile ayuda a Chile” que buscó reunir 15 mil millones de pesos para la construcción de 30 mil viviendas de emergencia.

Esto no es inédito en nuestro país. Ya en 1985 después del terremoto de Algarrobo, se efectuó una iniciativa de similares características en las que el objetivo fue el mismo: ir en apoyo de las víctimas del terremoto.

En la versión de 2010, la campaña liderada por el animador Mario Kreutzberger logró triplicar la meta inicial, reuniendo 45 mil millones de pesos, de los cuales, 30 mil 593 millones fueron destinados a la reparación de escuelas y otros 15 mil entregados a la Fundación Un Techo para Chile, para la fabricación de viviendas de emergencia.

La reacción de la ciudadanía fue rápida; sin embargo, por la cantidad de viviendas que debía reponerse la solución de más corto plazo fue entregar carpas a quienes lo habían perdido todo, o también, destinarlos a los albergues de las zonas más afectadas, en los que debieron pasar todo el otoño y parte del invierno.

Benilde Gutiérrez²⁰ es una de las personas que vio cómo su espacio familiar se redujo a una carpa entregada por el municipio. Comenta que estas no eran térmicas, por lo que debió forrarla con nylon.

Recuerdos de los primeros días después de la tragedia

En otra de las ciudades afectadas por el terremoto, Coronel, vive Aida Campos. Es una mujer joven, de cabello claro, que me recibe en la puerta de su vivienda²¹. Aida es amable, aunque tímida y de pocas palabras. Con la vista fija en el suelo, comienza a contar que la noche del 27 de febrero de 2010 se encontraba trabajando en una pesquera de la ciudad. Aida recuerda cómo los buses encargados de trasladar al personal hacia la ciudad huyeron sin ningún pasajero en su interior por lo que ellos, por sus propios medios, tuvieron que encontrar la forma de dejar las instalaciones de la pesquera, ubicada a orillas del mar.

Aida es una más de las personas que también recibió una carpa, a la espera de la instalación de su mediagua en la parte alta de la ciudad, en la aldea Santa Elena.

Esta mujer que bordea los 40 años, recuerda cómo constantemente debían ayudarse entre vecinos, ya que por las características del lugar la lluvia se colaba por abajo de las carpas. Otro de los problemas que debieron enfrentar fue la

²⁰ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Benilde Gutiérrez, damnificada residente en Aldea Coihueco de Penco. Diciembre de 2011.

²¹ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Aida Campos, damnificada residente en Aldea Santa Elena de Coronel. Noviembre 2012.

intensidad del viento, que con toda su fuerza arremetía contra estas endeble estructuras. Aida recuerda que en varias ocasiones las carpas estuvieron a punto de volarse, con lo poco y nada que el terremoto y el tsunami les habían dejado. “Los inviernos fueron bien crudos aquí arriba”, afirma.

Sin las mínimas comodidades, viviendo en carpas o en casas de familiares, todas estas personas esperaban una pronta solución por parte de un gobierno que recién asumido se mostraba muy dispuesto a enfrentar la tragedia, planteándose grandes metas e importantes desafíos, anunciados con gran publicidad a través de los medios de comunicación.

En este sentido, una de las primeras medidas publicadas por el Presidente de la República fue la creación del Comité Interministerial de Emergencia para el que nombró como Secretario Ejecutivo a Cristóbal Lira Ibáñez, quien fue gerente general de D&S, empresa dueña de la cadena de Supermercados Líder²² y miembro del directorio de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Piñera también configuró el Comité Interministerial de Reconstrucción, liderado por Marcelo Cox Vial, quien se desempeñó como gerente general de Cruz Blanca²³, que perteneció a su suegro Manuel Cruzat y al grupo Hurtado Vicuña, dueño, entre otras empresas, de la inmobiliaria El Bosque S.A, encargada de la

²² Esta cadena de Supermercados fue vendida en enero de 2009 a la firma norteamericana Walmart.

²³ A diciembre de 2013 un 40,64 por ciento de las acciones pertenece al grupo Said, liderado por José Said Saffie y Jaime Said Demaría.

elaboración del plan de reconstrucción de Talca²⁴. Actualmente Marcelo Cox es gerente general de inmobiliaria Proyecta.

Otra de las prioridades establecidas por el gobierno fue la búsqueda de desaparecidos y el restablecimiento del orden público y servicios básicos que en algunas localidades estuvieron suspendidos durante meses.

De acuerdo al informe *“Impactos ambientales del terremoto y tsunami”* de Fundación Chile y Terram; la empresa Essbio informó que después del terremoto más de un 80 por ciento de la población quedó sin agua potable, mientras que casi el 60 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas servidas quedaron inutilizables.²⁵ A fines de abril de 2010, 2 mil 500 personas seguían sin abastecimiento.

Una de las primeras metas anunciadas por el Gobierno de Sebastián Piñera, fue el inicio del año escolar de todos los estudiantes antes del 26 de abril de 2010, y la creación de 60 mil empleos de reconstrucción.

Otro de los hitos de esta etapa fue la imposición de una fecha tope: el 11 de junio de 2010, para la instalación de 40 mil mediaguas, que desde ese momento adquirieron la denominación de viviendas de emergencia.

²⁵Empresa sanitaria más importante en el servicio de agua potable en las regiones en Chile.

Finalmente el 16 de abril de 2010 el Presidente de la República Sebastián Piñera anunció en Coronel el plan de reconstrucción que el gobierno implementaría. Una de las principales tareas que se estableció en este documento, fue que al 11 de marzo de 2014, se encontraría materializada la recuperación de los sectores que se vieron afectados por el terremoto.

Según este plan, al 30 de junio de 2010 se habían instalado cerca de 70 mil “viviendas de emergencia”, cifra que casi duplicaba la meta inicial y que superaba la cantidad de mediaguas construidas en Chile durante la última década. El número final de viviendas establecidas fue de 70 mil 489, concentradas en las regiones de Maule y Bío-Bío, donde se entregaron 20 mil 670 y 25 mil 898, respectivamente. De estas, cerca de cuatro mil familias fueron instaladas en las aldeas de emergencia

Las mediaguas fueron armadas y situadas por distintos organismos públicos y privados; municipalidades, fundaciones, universidades, ONGs e incluso miembros de las Fuerzas Armadas. El proceso no estuvo exento de críticas. Algunos de los damnificados consideraron que quienes instalaron lo que sería su nuevo hogar, no tenían la preparación suficiente para garantizar la calidad de la solución.

Campamentos, el último recurso

Con el fin de promover y facilitar un enfoque basado en los derechos de las personas para el socorro en casos de desastre, el Comité Permanente entre Organismos (IASC)²⁶ por su traducción al inglés, adoptó las Directrices Operacionales IASC²⁷, de Naciones Unidas, que constituyen el primer documento que aborda el resguardo de los derechos humanos en situaciones de catástrofes naturales. Estas impulsan a los gobiernos a respetar todos los derechos de las personas afectadas ante este tipo de eventos.

Una consideración relevante plasmada en la Directriz A 4.1 indica que los campamentos son el último recurso y que solo se deben establecer en casos donde las personas no tienen la posibilidad de subsistir por cuenta propia. Asimismo, plantea que el objetivo fundamental a partir de la emergencia es la rápida rehabilitación de las personas, para que estas cuenten con los recursos necesarios para sustentarse por sus propios medios.

Las directrices IASC señalan, además, que estos asentamientos deberán ubicarse en zonas con un bajo riesgo de peligro natural y su diseño tendrá que maximizar la seguridad y la protección de sus habitantes, considerando

²⁶ Sigla en inglés que refiere a la Inter Agency Standing Committee, en español, Comité Permanente entre Organismos.

²⁷ Estas Directrices fueron preparadas por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Walter Kalin, y elaboradas por un Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre Organismos, IASC, que las aprobó el 9 de junio de 2006.

principalmente a las personas cuya seguridad personal corre más riesgo, a su entender, “los niños, niñas y adolescentes, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, las de hogares encabezados por una sola persona, los miembros de minorías étnicas o pueblos indígenas”.

A pesar de estos lineamientos, que hacen hincapié en la necesidad de la rápida recuperación de las comunidades y de garantizar la seguridad de los damnificados, la instalación de las aldeas parece haber sido un proceso poco planificado que no contó con los resguardos necesarios para asegurar estándares mínimos en la calidad de este tipo de viviendas.

Jacqueline Torres, se expresa fuerte y claro. Es una mujer morena, alta con voz grave y mucha seguridad en su expresión. Jacqueline recuerda que la mediagua que le asignaron fue construida por miembros del Ejército quienes, en sus palabras, “de construcción sabían poco”. Comenta que su vivienda tenía filtraciones y aunque hizo esfuerzos por arreglarla, el frío continuó colándose por las paredes, mientras algunos animales, como perros y ratones, buscaban refugio bajo lo que fue su hogar.

Las falencias que indica Jacqueline, respecto de la poca preparación en la construcción de mediaguas las confirma el testimonio de un miembro del Ejército que participó en la instalación de estas, específicamente en la región de O'Higgins. El uniformado, a quien llamaremos ficticiamente Patricio²⁸, por temor a

²⁸ Nombre que adoptó por temor a sanciones institucionales. Entrevista realizada en agosto de 2013.

posibles sanciones institucionales, cuenta que la única preparación recibida fue un manual de instrucciones de cómo armar una mediagua. No hubo charlas ni mayor instrucción, solo la supervisión de uno de los voluntarios de la Fundación Un Techo para Chile, dice.

El militar recuerda que la mediagua que ellos instalaron quedó hundida por lo que tuvieron que desarmarla y volver a construirla con el objetivo de dejarla “lo mejor posible”, aunque reconoce, “efectivamente, no quedó bien instalada”.

Otro aspecto relevante de esta etapa fue el alto costo de cada “vivienda de emergencia”. Según indica el Plan de reconstrucción Terremoto y Maremoto de 2010, elaborado por el entonces Ministerio de Planificación (Mideplan), estas tuvieron un valor promedio de 652 mil pesos.

Esa cifra, según indica el *Informe final de la comisión investigadora acerca de procesos de adquisición, localización, distribución y asignación de viviendas*, fue revisada por la Contraloría General de la República que detectó la compra de mediaguas por sobre los valores máximos establecidos. A un Techo para Chile se le canceló incluso 820 mil pesos por unidad.

También fue cuestionado el pago de incentivos económicos a los productores de mediaguas, y la poca claridad de los documentos que respaldaban la compra de estas viviendas. La explicación del Minvu para ello, fue que se debía

promover la producción rápida de estas viviendas, de las que, en un año normal, solo se producían cinco mil en Chile.

Estas primeras medidas instauradas tras el terremoto comenzarán a dar indicios de cuál sería el estilo de reconstrucción que propondría el gobierno.

En palabras de Francisco Letelier, sociólogo y miembro de la ONG Surmaule, “esta es una reconstrucción de corte neoliberal que básicamente tiene dos definiciones preocupantes: una es que no se generó ninguna política pública *ad hoc* a la proporción de esta catástrofe y en segundo lugar, se le dio al sector privado un rol incluso más importante que el del Estado, sin hablar del área inmobiliaria que ya tenía un rol relevante en la política de vivienda en Chile súper y que hacía y deshacía más o menos a su antojo”.

Fue en esta etapa de la emergencia cuando comenzaron a surgir con fuerza voces como la de Francisco, y otros, quienes con una mirada crítica observaron cómo empezaba a gestarse el modelo con el que Chile enfrentaría la reconstrucción.

CAPÍTULO III

Chile Unido ¿Reconstruye Mejor?

La gran cantidad de casas e infraestructura pública y privada destruida por el terremoto y tsunami, derivaron en la generación del Plan de Reconstrucción Nacional, Chile Unido Reconstruye Mejor.

En ese documento el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entonces encabezado por la ministra Magdalena Matte, realizó un catastro de los daños y estableció las líneas de trabajo con las que se abordaría la reconstrucción. Junto con ello definió la institucionalidad que se utilizaría para hacer frente a la tragedia.

Uno de los primeros compromisos del plan fue el establecimiento de una fecha tope de su ejecución: marzo de 2014. Ante el poco tiempo, la reconstrucción se planteó como una tarea que requería la colaboración de todos.

Según cifra este documento, para efectuar la reconstrucción se necesitarían dos mil 500 millones de dólares, repartidos en cerca de 220 mil subsidios adicionales a raíz de la catástrofe. Estos fueron tipificados de acuerdo al problema que intentaban solucionar, por ello, se entregaron para reparación; reconstrucción en sitio propio; adquisición de vivienda nueva, entre otros elementos extraordinarios como el financiamiento especial para restaurar viviendas en áreas rurales y patrimoniales.

El plan de reconstrucción se define a sí mismo como una oportunidad para reconstruir lo antes posible sin sacrificar la calidad de las soluciones ni el respeto por las comunidades y el patrimonio de las personas afectadas. Por esto, el gobierno se comprometió a entregar una solución a corto plazo y que contara con la participación de las comunidades.

Sin embargo, una de las críticas que surgió desde diversas organizaciones sociales inmediatamente después de lanzado el Plan, fue que se optó por entregar subsidios en base a la demanda, cimentados en los programas habitacionales existentes durante años. La principal diferencia; flexibilización de trámites, requisitos y tiempos establecidos para postular a estas ayudas estatales.

El enfoque de la reconstrucción, liderada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna, sucesor de Magdalena Matte,²⁹ y Francisco Irrarrázaval, subsecretario de dicha cartera, se puso sobre tres áreas específicas: Vivienda, Barrios y Ciudad.

En la escala de Vivienda se planificó la entrega de subsidios de reconstrucción y reparación; el área de Barrios se pensó para dar exclusiva atención a la erradicación de aldeas y condominios sociales dañados por el

²⁹ Magdalena Matte, esposa del Senador Hernán Larraín, dejó Ministerio de Vivienda en medio de la polémica por el caso Kodama, que involucró a esa empresa con su cartera, por un pago por costos extra de 17 mil millones de pesos destinados a la construcción de un corredor para el Transantiago en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esta renuncia fue comparada con la dimisión de la ex Intendente del Bío-Bío Jacqueline van Rysselberghe, quien abandonó su cargo en medio de denuncias por irregularidades en la entrega de subsidios de reconstrucción surgidas desde la población Aurora de Chile de Concepción.

terremoto, mientras que la escala Ciudad y Territorio se vinculó con la actualización de planes reguladores, recuperación patrimonial y ejecución de planes maestros, cuyo objetivo fue contribuir a potenciar la identidad de las localidades afectadas.

De acuerdo a esta clasificación, el Minvu identificó siete tipos de problemas en materia de daño. El primer punto fue dar solución a las familias que residían en viviendas construidas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), o sus antecesores, y que resultaron destruidas o gravemente dañadas.

También se puso foco en los grupos familiares en condición de extrema vulnerabilidad social, que quedaron sin vivienda luego del terremoto; que vivían de allegados, no poseían título de propiedad o habitaban zonas de riesgo

Otro problema que se intentó resolver fue la reconstrucción de las viviendas de adobe, para lo que se estableció un subsidio especial para los residentes de sectores rurales o urbanos y también para los afectados que habitaban zonas típicas o de interés patrimonial.

Finalmente, se buscó dar respuesta a las familias damnificadas no beneficiarias de seguro de sismo, con capacidad de endeudamiento, y también, a las personas de escasos ingresos que sufrieron daños reparables en sus viviendas.

Para estos siete problemas se plantearon siete tipos de soluciones³⁰. Entre ellas; la construcción de vivienda en el mismo sitio, o en sitio nuevo; la actualización de los planes reguladores; generación de un proyecto urbanístico de la ciudad, reconstrucción o restauración de acuerdo a la arquitectura original; entrega de subsidios para postular a créditos bancarios, y, finalmente, la asistencia técnica y bono de reparación para autoconstrucción.

La participación ciudadana, entendida como la posibilidad de elegir una vivienda, y la redistribución de recursos en función de la demanda fueron prioridades para el gobierno de Sebastián Piñera a la hora de aplicar el plan de reconstrucción nacional

Cada familia que postulara a alguna ayuda del Estado debía tener un certificado de daño emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y estar inscrita en el registro de damnificados. Mientras que, aquellas personas que antes del terremoto arrendaban una vivienda debían certificar su condición a través de un contrato de arriendo o boletas de servicios.

³⁰ Los principales instrumentos que contempla este plan para la entrega de soluciones son los mismos utilizados en un período normal, la diferencia es que aumentó la cantidad de entregas. Sin embargo, continúan siendo los subsidios de tiempos regulares: Subsidio Fondo Solidario de Vivienda I; Construcción en Sitio Residente o en Nuevo Terreno (CRS y CNT); Fondo Solidario de Vivienda I Construcción en Sitio Residente Urbanismo (FSV1CSR+URB); Decreto Supremo 40 (DS40) y el programa de Protección de Patrimonio Familiar (PPPF).

Asimismo, las familias que postularon como allegadas, debían acreditar su condición a través de la Ficha de Protección social (FPS) previa al 27F. Este fue uno de los puntos que generó mayor controversia entre los damnificados puesto que, según el Ministerio de Vivienda, apuntando a la correcta focalización de los recursos no se consideró como allegadas a las familias con menos de siete integrantes.

El catastro preliminar de la demanda realizado por el Minvu estableció que el total de viviendas dañadas por el terremoto, entre ellas los conjuntos habitacionales privados y del Serviu, fue de 370 mil 051. De estas, 81 mil 444 resultaron completamente destruidas.

A pesar de estas cifras, el Minvu estableció ciertos criterios de elegibilidad. Según señala el Plan de Reconstrucción nacional, de 217 mil 469 viviendas destruidas o severamente dañadas, solo un 62 por ciento podría acceder a una solución otorgada por el gobierno. Con esta nueva clasificación, el valor promedio del subsidio fue de 281 UF. En el caso de los destinados a la reparación de viviendas estos tienen un costo promedio de 81 UF y de 499 UF para la adquisición de viviendas.

Flexibilizando los mismos instrumentos

Las etapas de postulación al subsidio quedaron de la siguiente manera: registro de damnificado; proceso de postulación; asignación de subsidio y finalmente la etapa de construcción de vivienda o reparación.

Una de las medidas que buscó agilizar la postulación a las soluciones ofrecidas fue la reducción del tiempo necesario para regularizar los títulos de dominio. Además se permitió la postulación a subsidios de reconstrucción a personas que habitaban terrenos en sucesión, mediante la autorización notarial de los herederos para reconstruir en él.

Un aspecto nuevo fue la puesta en marcha del subsidio de construcción en sitio propio con proyecto tipo, el que según Chile Unido Reconstruye Mejor: “es un llamado a las constructoras a ofrecer soluciones habitacionales por un monto fijo de dinero y una oportunidad para que las familias damnificadas postulen directamente al Serviu a una vivienda pre- certificada del banco de proyectos tipo”. Esto fue visto por el ministerio como una oportunidad de unir la oferta y la demanda.

A cuatro meses de la puesta en marcha del plan, 280 mil familias se encontraban inscritas esperando una solución gubernamental.

El registro de damnificados

Para conocer la cantidad de damnificados el gobierno realizó un catastro a partir de la demanda, es decir, se llamó a la población afectada a inscribirse en un registro que les permitiría postular a los diversos subsidios de reconstrucción.

Las familias enlistadas debían ser visitadas por personal técnico de las Dirección de Obras Municipales (DOM), encargada de certificar el daño de las viviendas. Esto generó algunas complicaciones, ya que cuando se cerró el registro en agosto de 2010, no todas las familias habrían alcanzado a inscribirse.

Además, el requerimiento realizado desde el gobierno central hacia el municipio provocó una sobre carga en los equipos municipales de trabajo, que durante esos primeros meses enfrentaron con grandes dificultades la emergencia. A eso se sumó que el criterio para acreditar la condición de allegados fue la Ficha de Protección Social (FPS) que nuevamente entregó gran responsabilidad a estos equipos.

El registro de damnificados se cerró el 30 de julio de 2010 para las comunas con más de 10 mil habitantes, y el 27 de agosto para las de menos de 10 mil. En este se inscribieron 286 mil familias de las cuales, 137 mil tenían sus viviendas inhabitables y 149 mil, según los datos del gobierno, recuperables.

Otra causa para no tener derecho a acceder a las soluciones entregadas por el gobierno fue ser postulantes unifamiliares o no tener los documentos que acreditaran su condición de allegados o arrendatarios.

Reparando errores estatales

Uno de los ejes del plan de reconstrucción fue el programa de atención a aldeas y condominios sociales. Este surge debido a que un número importante de familias que habitaban en barrios y conjuntos sociales construidos por el Serviu, y sus antecesores, resultó afectado por el terremoto.

Si bien en algunos lugares los daños fueron menores, el caso más grave se produjo en Constitución donde el desplome de un condominio social de “Cerro O’Higgins” costó la vida a ocho personas.

Una de las damnificadas de este sector es Patricia Lastra³¹. Ella es una de las líderes de su comuna, con fuerza y seguridad indica que ha fallado la fiscalización por parte del Serviu, “Nuestros departamentos estaban mal construidos, después de ocho años de ser habitados se supo que tenían fallas estructurales gravísimas. El Ministerio de Vivienda actuó con negligencia y después se llenan la boca hablando de que existe una sociedad más justa e igualitaria, cuando no son capaces de garantizar los derechos básicos de un

³¹ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Patricia Lastra, damnificada de Constitución. Diciembre de 2013.

individuo, el derecho a vivir de manera digna y segura. ¿Cómo piensan avanzar en otros aspectos sociales?, se pregunta Patricia. Ella aún reside en una mediagua.

Como en el caso del Cerro O'Higgins, el Minvu detectó cerca de 15 mil condominios sociales dañados de los cuales 8 mil debían ser reparados y 7 mil demolidos y reconstruidos. Sin embargo, las 4 mil 350 familias que no tuvieron un terreno donde instalar su mediagua fueron ubicadas en 107 aldeas de emergencia.

Para darles solución el gobierno estableció nuevamente tres líneas de trabajo: demanda de reconstrucción para aquellos proyectos que debían ser demolidos y reconstruidos, demanda de reparación y finalmente demanda de erradicación para los habitantes de “aldeas de emergencia”.

Según consta en el Plan de Reconstrucción, el objetivo del Programa de atención a aldeas y condominios sociales fue resolver la situación previa de alta vulnerabilidad social de las familias afectadas, reconstruir rápido y mejor y contar con la participación de las familias en el proceso para generar competencia por la demanda en beneficio de los damnificados.

De los 15 mil condominios sociales dañados por el terremoto, el Ministerio de Vivienda determinó la demolición de 26 de estos, entre los cuales se cuenta a Villa Futuro de Chiguayante y Centinela II de Talcahuano, emblemáticos en este proceso de reconstrucción por su oposición a las soluciones entregadas.

Para determinar qué conjuntos serían demolidos se realizaron diversos estudios³² cuyo objetivo fue tener información de las condiciones pre y post 27F de las familias que vivían allí. Sin embargo, los damnificados no confían y por ello, con el apoyo de profesionales independientes, organizaciones y universidades elaboraron sus propias evaluaciones, que en ocasiones contrastan con la información otorgada por el gobierno.

Atención a Aldeas

Como ya se ha mencionado, se instalaron a nivel nacional 107 aldeas de emergencia concentradas principalmente en las regiones de Maule y Bío-Bío con 16 y 84 asentamientos, respectivamente.

La promesa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue equipar estos lugares de manera que los damnificados pudieran hacer frente de la mejor forma posible al invierno de 2010. Según consta en el Plan de Reconstrucción, cada aldea contaba con un *kit* eléctrico, aislación térmica, impermeabilización. Además, batería de cocina, colchones, frazadas, baños para compartir con dos o tres familias, un equipo social encargado de apoyar en la postulación y coordinar actividades comunitarias, entre otros.

³² Se efectuó un estudio técnico realizado por una empresa externa al Minvu, una evaluación técnica de los daños, un estudio económico y posteriormente un estudio social, ejecutado por el municipio.

El trabajo dentro de estos asentamientos fue liderado por un ejecutivo de proyecto cuya primera tarea fue entregar una solución definitiva, antes del invierno del 2012, a cada una de las familias que la conformaban. Esta promesa resultó un tanto ambigua para los damnificados, pues si bien a la fecha señalada la mayor parte de ellos contaba con un subsidio, estaba lejos de tener en sus manos una solución definitiva.

La composición de las aldeas de emergencia fue determinada por la situación de las personas post terremoto, a estas llegaron familias que fueron desplazadas conjuntamente, como en el caso de los damnificados por el tsunami, pero también quienes residían en aquellos sectores declarados como inhabitables o quienes no tuvieron un terreno para instalar su mediagua.

Las soluciones ofrecidas para estos grupos se basaron en los subsidios de Construcción en Nuevos Terrenos y Adquisición de Viviendas Construidas, instrumento que priorizó la erradicación de las aldeas con la promesa de brindar apoyo psicosocial a las personas afectadas.

La búsqueda de un lugar adecuado donde instalar estos nuevos hogares fue otro desafío que impuso el terremoto a las autoridades locales. Al ser la Construcción en Nuevos Terrenos una de las opciones de subsidios más importantes para estas familias, el Ministerio a través de sus equipos, debía considerar factores como la localización, el presupuesto disponible y la densidad del proyecto.

En este sentido, lo más rentable y conveniente para los ejecutores de la reconstrucción, es decir, las empresas constructoras, fue comprar grandes paños de terrenos en las periferias de las localidades de las comunas afectadas.

Reconstrucción del adobe y borde costero

El Programa de Reconstrucción Territorial, Urbana y Patrimonial señala que de las 239 comunas afectadas por el terremoto, 66 necesitaron una actualización o modificación de sus planos reguladores. De ellas, 33 pertenecían al borde costero.

Se redefinieron los instrumentos de planificación en función del riesgo: se modificaron los planos reguladores y se establecieron áreas que no pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades permanentes, como por ejemplo, la residencia.

Esta regulación del uso de suelo del borde costero también busca generar obras de mitigación. En esta línea, el Minvu, junto a organizaciones públicas y privadas desarrolló propuestas de planes maestros en las localidades costeras de las regiones de Maule y Bío-Bío³³.

³³ Las localidades costeras para las que se desarrolló nuevos Planes Maestros fueron Constitución, Juan Fernández, Licantén, Pelluhue y Curanipe, de la región del Maule y 18 planes maestros de reconstrucción del borde costero de la región del Bío-Bío (PRBC18) en las localidades de: Cobquecura, Perales, Purema, Dichato, Coliumo, Caleta del Medio, Los Morros, Penco-Lirquén, Talcahuano, Tumbres, Lo Rojas, Puerto Sur, Tubul, Llico, Lebu, Quidico, Tirúa e Isla Mocha.

Con los nuevos instrumentos de regulación, la ocupación del borde costero quedó dividida en dos sectores; áreas de riesgo y zona excluida de este. En las primeras existe una franja con uso restringido, que es la inmediatamente continua al mar y que podrá ser utilizada para fines específicos³⁴.

Asimismo, en la zona de restricción dos, también se condiciona el uso de suelo aunque se permite instalar viviendas, hospedaje y diversa infraestructura pública y privada. Se excluye de esta área todo lo relacionado con equipamiento educacional, de salud, seguridad y servicios.

Finalmente, el área sin riesgo permite la instalación de viviendas, hospedaje, infraestructura pública y privada e incluye los servicios de salud, seguridad y actividad productiva.

Esta segmentación influye directamente en la entrega de subsidios ya que el Estado no otorga subsidios en áreas de riesgo de inundación. Por ello, las personas que antes del tsunami vivían en el borde costero tuvieron como solución relocalizar y reconstruir su vivienda en una zona sin riesgo de inundación, lo que significa ser expropiados.

Esta medida generó la oposición de algunas personas, principalmente en Dichato, cuyos habitantes no vieron con buenos ojos el embargo de sus viviendas

³⁴ En esta área el suelo puede ser utilizado para el desarrollo científico, deporte, esparcimiento y comercio, áreas verdes y espacios públicos junto a infraestructura de transporte y actividades productivas.

por parte de la autoridad. Es el caso de Lorena Arce,³⁵ de Dichato. Según ella, la reconstrucción se convirtió en “la oportunidad para hacer negocios inmobiliarios, por parte de los empresarios”.

Para agilizar la reconstrucción, -explica el gobierno, el Minvu en conjunto con organizaciones públicas y privadas desarrolló 25 planes maestros para las principales localidades afectadas por el terremoto y tsunami.

Los Planes Maestros de Reconstrucción incluyen: Plan de Reconstrucción Estratégica Sustentable, (PRES) en localidades del borde costero; Plan de Reconstrucción Estratégica (PRE) en localidades interiores, Planes de Reconstrucción del Borde Costero en la región del Biobío (PRBC18)y Plan de Regeneración Urbana (PRU) en localidades intermedias.

La forma de financiamiento de estos también se basó en convenios público privados entre municipios, gobiernos regionales, empresas y organizaciones sociales, donde el Minvu actuó como garante. En estos acuerdos, participaron compañías como Cencosud, el grupo Hurtado Vicuña, grupo Arauco, entre otros.

Un acuerdo relevante fue la firma del Plan de Reconstrucción del Borde Costero18 (PRBC18), avalado por la ex Intendenta de la región del Bío-Bío Jacqueline van Rysselberghe. Una de las consecuencias emblemáticas de este

³⁵ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Lorena Arce, damnificada residente de Dichato. Febrero de 2013.

convenio fue la reconstrucción de Dichato, que tuvo como una de las primeras obras concluidas el *boulevard* Daniel Vera cuyo objetivo fue reactivar la economía de la localidad.

Como primera acción se instalaron unos *containers* a los que denominaron el *mall* de Dichato, que se vieron nuevamente afectados por la subida de mar que generó el terremoto de Japón en marzo de 2011.

El Plan de reconstrucción que entre sus ejes plantea el avanzar rápido, con una visión de largo plazo y participación ciudadana, día a día es cuestionado por los damnificados y organizaciones de la sociedad civil, quienes han visto cómo se alarga un plan de reconstrucción cargado de frustradas expectativas.

CAPÍTULO IV

Vida de Campamento

Una de las comunas afectadas por el terremoto y tsunami fue Constitución. Emplazada en la costa de la región del Maule, justo en la desembocadura del río del mismo nombre, esta ciudad recibe a sus visitantes con un particular paisaje.

El camino para llegar a la tierra de los *mauchos*³⁶ da cuenta de que esta es una zona de alta explotación forestal, aquí la industria maderera convirtió el paisaje y modificó sus formas y colores dando paso a la deforestación.

Después de recorrer casi noventa kilómetros desde San Javier, Constitución da una particular bienvenida a sus visitantes; la imponente planta de celulosa de la empresa Arauco ocupa varios kilómetros del borde costero y con sus humeantes chimeneas hace sentir que se está llegando a su territorio.

El tsunami fue muy duro con esta zona pero el desastre pudo haber sido aún mayor considerando que la fuerza del agua tampoco tuvo contemplación con este gigante industrial, que vio detenida sus operaciones por cerca tres meses. A pocos metros del coloso, los *mauchos* continúan con su vida diaria, o al menos, eso intentan.

³⁶ Gentilicio con el que se conoce a los habitantes de la desembocadura del río Maule.

Según el informe *“El Terremoto / tsunami en Chile. Una mirada a las estadísticas médico legales”*, en esta tierra fallecieron 96 personas a causa del terremoto y tsunami. La situación vivida aquí fue especialmente dramática, pues un alto porcentaje de estas víctimas no pudo escapar de las olas por encontrarse en Isla Orrego.

A metros de este lugar vivía Aracelli Contreras; se ve una mujer modesta cuya principal fuente de ingresos es la venta de frutas y su pertenencia a los programas de empleo que temporalmente impulsa la Corporación Nacional Forestal (Conaf).³⁷

Aracelli vive en la aldea La Poza 2, uno de los ocho campamentos que el Gobierno instaló en Constitución después del terremoto y tsunami. Ella es una de las dirigentes de este sector ubicado en pleno borde costero; ese que fue brutalmente arrasado por la fuerza del mar. Ahí el viento es fuerte en toda época del año y la tragedia es difícil de olvidar pues la Isla Orrego, con su dañada vegetación, se encarga de recordarlo día a día.

Al caminar por el sector se ven muchos perros vagos rondando el lugar. Se pasean por la tierra, entre una y otra mediagua tal vez buscando comida o cobijo. El paisaje es inhóspito pero Aracelli no tiene problemas en abrir las puertas de su hogar, el que día a día intenta hermosear.

³⁷ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Aracelli Contreras, damnificada residente en Aldea La Poza de Constitución. Diciembre de 2011.

Es difícil imaginar todo lo que ella vivió durante esa noche del 27 de febrero. Mientras ordena algunas cosas, cuenta cómo fue su experiencia y lo que significó el tsunami para ella y su familia.

La fuerza del agua arrasó con su casa y con las de sus vecinos, los obligó a vivir en carpas y destinó a mediaguas en las que han debido residir por más de tres años.

Es un espacio reducido, algunas plantas decoran su hogar y las ventanas están cubiertas con plástico para combatir de mejor manera el frío y el viento de la zona.

No es complejo imaginar cuál es la estación más dura para ella, basta con mirar alrededor y ver cómo los rayos de luz se cuelan por sus paredes, evidenciando las innumerables filtraciones. Aracelli cuenta que una de las agravantes en sus condiciones de vida es que al estar en la parte baja de Constitución reciben el agua de casi toda la ciudad que va al río”. Para ella lo más crítico es el viento y las voladuras de techo durante el invierno que la han obligado a ser el “maestro” de la casa.

Los recuerdos de los momentos posteriores al terremoto no son gratos. Se vio forzada a vivir en una carpa, hasta el día en que la capilla San José de Constitución le entregó una mediagua, que según cuenta; no fue instalada por los militares quienes se negaron a hacerlo por ser donación de privados.

Mientras Aracelli se encontraba a la espera de su solución de emergencia, optó por enviar a sus dos hijas a vivir con sus padres a Chillán. “Yo me quedé cuidando las cosas que me llegaban de particulares y para no perder mi cupo de vivienda”, comentó.

Sin servicios básicos durante casi un año, la preocupación estaba en las enfermedades que podían aparecer, pero también, en el riesgo que implicaba alumbrarse con velas en este tipo de viviendas altamente inflamables.

Otro de los grandes problemas que enfrentó durante los primeros meses fue la falta de servicios higiénicos. Según afirma Aracelli, estos fueron instalados un año después de ocurrido el terremoto y tsunami: “El *container* de acá lo vino a dejar el intendente y el gobernador, para la prensa. Le sacaron fotos, bonitos los baños, y se demoraron más de un año en instalarlos”, afirma.

El verse forzada a reducir drásticamente el espacio en el que vivía fue un gran cambio que tuvo que enfrentar. Estar obligada a salir de su casa para algo tan simple como ir al baño, y en un primer momento, tener que compartirlo con otras familias, es algo que recuerda con mucha rabia: “Antes compartíamos el químico, sacábamos tarros con agua e íbamos a bañarnos con el mismo excremento ahí. Poníamos la tapa y nos bañábamos, nos tirábamos agua y salíamos bañadas; éramos ocho familias en un químico bañándose. Familias completas, de cuatro o cinco personas”, recuerda.

Otro de los problemas que afectan a Aracelli es la falta de seguridad. Su mayor preocupación son sus hijas, pero también piensa en los niños de toda la aldea.

No fue fácil adaptarse a vivir en el campamento y probablemente no lo consiguió. Con tristeza comenta: “Nosotros no estábamos acostumbrados a vivir en comunidad, con diferentes personas. Aquí en el sector hay droga, alcohol, maltrato familiar, entre parejas. Imagínese cómo son los fines de semana aquí”.

El terremoto para Aracelli significó más que la destrucción de su casa; perdió sus recuerdos, su comodidad pero también su confianza. Ella no confía en sus vecinos y tampoco en sus autoridades. Se siente engañada. Ya no cree en anuncios ni fechas, lo que tiene claro es que cumplirá cuatro años viviendo en la aldea porque la reconstrucción en Constitución “va pa’ largo”, afirma.

La situación de Aracelli Contreras no es única. Después del 27 de febrero de 2010 se instalaron en Chile 80 mil mediaguas, de las que 4350 fueron ubicadas en las aldeas de emergencia. Durante los meses que los damnificados han vivido, o vivieron en estas, fueron testigos de cómo disminuyó dramáticamente su calidad de vida y cómo las cosas más simples y cotidianas se transformaron en un verdadero lujo.

Los problemas son muy variados y diversos; van desde la carencia de servicios básicos, el acceso a la ciudad, hasta el aumento de violencia intrafamiliar y el surgimiento de graves conflictos entre los mismos vecinos.

La pérdida del espacio privado

Una de las medidas con que el gobierno enfrentó la catástrofe fue la instalación de 107 aldeas de emergencia. Conocidas durante años como campamentos, el gobierno decidió impulsar una nueva denominación para estos espacios aludiendo al equipamiento con el que cuentan.

En respuesta a la solicitud de acceso a la información pública,³⁸ el Ministerio de Vivienda y Urbanismo indica que las aldeas son asentamientos de emergencia creados a raíz del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, mientras que los campamentos son asentamientos preferentemente urbanos de más de ocho familias que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos uno de tres servicios básicos (agua potable, electricidad y sistema de alcantarillado) y cuyas viviendas se encuentran agrupadas y contiguas.

A pesar de esta diferenciación, en la teoría, basta con recorrer alguna de las “aldeas” existentes para darse cuenta que las similitudes son más de las que se quisieran. Esta nueva imagen del país trae a la memoria ese Chile que durante muchos años se quiso dejar atrás, cuya meta era lograr que a 2010 no hubiera ningún campamento.

³⁸ Solicitud de acceso a la información pública N° (CAS-2284955-T1W8F3)

Llegar a una “aldea” no es tarea fácil, se encuentran en terrenos en las fueros de las ciudades o en sitios con poca accesibilidad. Sus habitantes se ven cansados; los agobia tener que esperar la reconstrucción; los asecha la incertidumbre de no saber cuándo llegará su solución definitiva y por cierto, día a día enfrentan diversos problemas.

Han contado una y otra vez su historia; autoridades, periodistas, turistas y estudiantes, sobre todo durante los primeros meses, los bombardearon de visitas. Cada 27 de febrero el acoso vuelve. A algunos les sirve como terapia, a otros los hace recordar permanentemente esa imagen que quieren olvidar.

Durante mi recorrido a fines de 2011, durante 2012 y también en 2013, pude ver las condiciones de vida en que quedaron cientos de damnificados: baños que se encuentran a metros de distancia, casas extremadamente contiguas, decenas de perros vagos y un terreno que difícilmente permite el acceso a los servicios básicos, son una postal común.

La mayoría de las mediaguas se encuentran reforzadas con cartón y nylon para hacer frente al invierno. Pero los sitios en los que están emplazadas dificultan aún más el panorama; se sitúan a campo abierto, sobre los cerros o en el borde costero donde el viento y la lluvia golpean sin clemencia las ligeras construcciones.

A simple vista este tipo de vivienda no es una solución especialmente pensada para las zonas que el terremoto golpeó con más fuerza; se trata de ciudades del centro y sur del país donde el frío y la lluvia no dan tregua durante los meses de invierno.

Una condición difícil de aceptar

Una de las situaciones más molestas es el barro que se acumula en los terrenos. “Pasamos todo el invierno con barro y estamos en verano y todavía hay”, expresó Aracelli Contreras.

Jacqueline³⁹, quién no quiso dar su apellido debido a que le avergüenza vivir en un campamento, también es de Constitución. Es una mujer joven y tímida que con resignación recuerda lo que tuvo que vivir tras el terremoto. La fuerza del mar la dejó sin nada, pero más allá del mismo desastre, el tener que adaptarse a una nueva y reducida vivienda es una de las cosas que más le costó. Tuvo que aprender a vivir con su nueva realidad, que durante los primeros meses le resultó doblemente dura.

La experiencia de estar en una aldea es un hecho que la marcará el resto de sus días, le afecta que su casa sea una mediagua, pero lo más duro para ella

³⁹ Entrevista realizada a Jacqueline para esta Memoria de Título. Santiago. Diciembre de 2011.

fueron esas primeras salidas al baño; “uno tiene que salir con bata pero igual te miran toda”, afirma.

A varias cuadras de distancia, en la parte alta de Constitución, se instaló la aldea Antofa en la que residió durante más de tres años Julia Cerda⁴⁰. Es una mujer de 62 años y cree que tiene suerte de estar viva, a pocos metros de lo que antes era su casa ubicada en el cerro O’Higgins, la noche del 27 de febrero se derrumbaron los departamentos que causaron la muerte de sus ocho vecinos, entre ellos, cuatro niños.

Julia no imaginó el peligro que corrió esa madrugada; simplemente arrancó por el temor de que viniera una réplica y recién al día siguiente se dio cuenta del estado en el que había quedado su departamento.

Aunque agradece que solo tuvo pérdidas materiales, para ella tampoco fue fácil adaptarse a la circunstancias. Reconoce que nunca en la vida imaginó que algo así podía ocurrirle y le afecta tener que pasar por esto: “Imagínese en la aldea tenemos que pasearnos por delante de todos, recién bañados”, exclamó.

Julia se muestra alegre y con ganas de impulsar actividades para sus vecinos. Sin embargo reconoce que la inquieta lo que para ella es la principal carencia: pérdida de privacidad: “Si uno mete mucha *bolina*,⁴¹ en la mediagua que

⁴⁰ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Julia Cerda, damnificada residente en aldea de Constitución. Diciembre de 2011.

⁴¹ Se refiere al ruido.

está al lado se escucha todo y al otro día pura risa. En un principio era chiste pero a la larga eso va molestando, porque nosotros teníamos un departamento donde estaba todo adentro, y pasar de eso a salir a bañarse afuera, lavar loza afuera es un cambio duro”, señala.

Waldo Chaparro⁴² aparece con un aspecto humilde y resignado desde la puerta de su mediagua en el sector La Poza de la misma ciudad. Es un hombre adulto que se ve muy afectado por la situación en que lo dejó el terremoto. Tiene diabetes, perdió la vista del ojo izquierdo y su trabajo, por lo que durante mucho tiempo la encargada del sustento económico de la casa fue su esposa.

Agradece no haber tenido que vivir en carpa, pues una familia los acogió y luego fue recibido en la casa de un hermano. Allí permaneció durante dos meses, hasta que volvió a cuidar su terreno en el borde costero. Según él, “con esta cuestión de la expropiación que hay ahora, nos lo habrían quitado, sin derecho ni a voz ni a voto. Medio año nos tuvieron botados, pero ahí nos las ingeniamos”, señala.

Con voz temblorosa Waldo reconstruye parte de esos primeros días: “Para uno es denigrante, uno que nunca ha pedido nada, es una cosa tan estúpida andar diciendo: ‘quiero una frazada, por qué no me das una frazada’, pedir agua, ir a pedir una bebida a la Municipalidad. Había que ir al gimnasio de Arauco a

⁴² Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Waldo Chaparro, damnificado residente en Aldea La Poza de Constitución. Diciembre de 2011.

buscar comida, ahí se hacían colas y llegábamos y decían ‘no hay’, ‘se acabó’. Se arreglaban los que estaban más *apitutados*⁴³”.

Waldo considera que las mediaguas no son malas estando bien forradas, el problema es que el frío entra por debajo de los pisos ya que, a su juicio, los militares las dejaron mal instaladas porque no tuvieron instrucción de cómo hacerlo: “Debió haber una persona encargada para que las mediaguas no se llovieran”, afirma.

Noelia Tapia vive en Dichato, la ahora nombrada localidad del borde costero de la Región del Bío-Bío, perteneciente a la comuna de Tomé. Hasta antes del terremoto, sus playas eran reconocidas en la zona por sus arenas claras y por sus aguas calmas, eso hasta la madrugada del 27 de febrero.

Para quienes no habían ido al balneario antes del terremoto, probablemente esta es una más de las comunas afectadas por el desastre; sin embargo para habitantes y cientos de veraneantes que año a año visitaban el lugar las huellas que el tsunami produjo en Dichato fueron las de una ciudad en ruinas.

El terremoto y maremoto dejaron un saldo de 17 personas fallecidas en la comuna de Tomé. El paisaje cambió drásticamente y si antes los turistas que llegaban a la localidad se encontraban con una preciosa vista al mar, tras el 27F

⁴³ Persona que consigue beneficios a través de influencias, autoridad o poder de aquel que le brinda apoyo. También se refiere a aquel que usa sus conexiones e influencias para conseguir algo.

debieron sumar la imagen de la aldea más grande de Chile con 460 familias albergadas en su interior: El Molino.

Ubicada en el camino público que conduce a Dichato, El Molino es la huella imborrable del desastre que el terremoto legó a esa localidad. La tierra húmeda bajo los pies, las mediaguas muy próximas una con otra, grandes containers, que funcionan como baños, son una postal que no solo se ve en El Molino y que Noelia vive día a día.

Al interior de una de las sedes sociales construidas en la aldea El Molino, Noelia prepara una olla común para ella y parte de sus vecinos. Cocina tallarines y algunas personas ya han comenzado a acercarse en busca de su porción de alimentos.

Mientras revuelve este gran fondo de comida, cuenta cómo nació la idea de hacer una olla común: “Surgió de todos, porque hay vecinos que, por ejemplo, tenían tallarines, otros tenían salsa, entonces todos traían algo, lo hacemos aquí y lo repartimos con la gente”.

Noelia es separada, tiene cuatro hijos y antes del terremoto vivía en el centro de la ciudad. El maremoto la trasladó a El Molino donde intentó adaptarse como pudo. “Mi casa la arrancó completa y me la fue a dejar como una cuadra más lejos”, recuerda.

Uno de los puntos que critica es la lejanía de la aldea respecto de la ciudad. Quienes viven en El Molino se ven prácticamente obligados a pagar colectivo o micro para bajar a la ciudad: “La locomoción aquí en Dichato es pésima; tú puedes estar una hora esperando un bus”, comenta.

Sin embargo, una de las carencias que más afectó a Noelia fue la falta de agua: “Aquí los tachos se llenan dos veces por semana y con toda la gente que vive acá no alcanza. Hay que lavar, hay hartos hijos; adultos mayores postrados; discapacitados que tienen que lavarle las heridas, etcétera. Para eso tú necesitas agua potable”, expresa.

A un costado de la carretera en la misma aldea El Molino vive Rosa González. Hasta antes del terremoto ella residía en pleno centro de Dichato y como muchos en la localidad, sus ingresos económicos provenían del turismo y arriendo de cabañas.

Rosa recuerda la noche en que ocurrió el terremoto; tenía sus tres cabañas arrendadas y debió gritarles a sus huéspedes que arrancaran porque se iba a salir el mar. Alcanzó a huir antes de que el agua se llevara su trabajo de años: “Todas esas cosas que nos pasaron son terribles; yo por mí arrancaría, porque a veces ando llorando sola por todos esos problemas”, cuenta.

Fiel a su espíritu emprendedor, instaló un negocio de abarrotes en El Molino donde tuvo que volver a enfrentar una tragedia, durante 2011 se quemó parte de su mediagua y la mercadería por lo que tuvo que pedir ayuda nuevamente.

A medida que va reconstruyendo su historia, esta mujer comienza a entristecer. El terremoto la afectó de gran manera; de vivir con todas las comodidades, se vio confinada a un par de mediaguas: en una de ellas instaló su negocio y en la otra su hogar.

Rosa siente rabia, fue testigo de cómo en su querido Dichato una de las primeras obras que comenzaron a ser construidas fue el *boulevard* Daniel Vera. Cree que la prioridad debieron ser las casas y la solución a los problemas de los damnificados.

Sara Ampuero también vive en Dichato, camina por la aldea con la mirada triste un chaleco negro y pantalones de buzo plomo. Mientras avanza por las calles de El Molino va contando cómo ha sido su estadía en la “aldea”. Sara está cansada, al punto de que hasta sus vecinos llegaron a molestarle: escuchar las discusiones de la familia de al lado, ver a su hija acarreando baldes de agua para bañarse, son huellas del terremoto que jamás olvidará.

“Las cosas se acaban de la noche a la mañana, una vez nos sacaron en una revista cómo vivíamos, se me cayeron las lágrimas cuando vi la foto,

buscando desperdicios de casas para protegernos del frío y todo eso”, reflexiona Sara.

En la misma región del Bío-Bío se encuentra Penco, esta comuna también situada en el borde costero tiene como una de sus principales características dar cabida a una gran cantidad de industrias; entre las ellas Indura, y varias empresas pesqueras.

Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en Penco se instalaron cuatro aldeas de emergencia después del terremoto, una de ellas; la aldea Coihueco. A este lugar llegó a vivir Jacqueline Torres cuando su hogar quedó inhabitable.

“Como el mar llegó a nuestras casas empezó a bajar una plaga de ratones y por eso yo creo que nos sacaron de ahí”, explica Jacqueline.

Se ve fuerte y valiente, morena de pelo largo y con una mirada segura, fue una de las líderes de la aldea Coihueco. Ella junto a otras mujeres, eran las encargadas de organizar el trabajo en la aldea, especialmente lo referente a la limpieza de los espacios comunes.

“Yo creo que la gente que ve esto de afuera tiene que decir que estamos muertos de la risa porque vamos a tener nuestra casa gratis, pero lo que tuvimos que vivir para llegar a eso es un hacinamiento horrible. Los espacios entre las

mediaguas no alcanzaban a ser un metro, ¿dónde está la privacidad? Tú no puedes discutir, alegas un poquito fuerte y te escucha la vecina de adelante o el vecino de atrás. La distancia con el baño, imagínate en la noche, yo tengo que venir con uno de mis hijos, es lejísimo. Yo tengo la facilidad de que mi mamá vive al frente del baño, por último vengo acá para compartirlo con ella porque uno no está acostumbrado a compartir baño con gente que tú no conoces, con otras costumbres (...) Yo no le daría esto ni a mi peor enemigo”, señala.

En el límite oeste de Penco se encuentra Talcahuano. Traducido en mapudungun como *cielo tronador* es conocido como el primer puerto militar, industrial y pesquero de Chile. En esta ciudad vive Rosa Pastén, en la aldea Rocuant.

Rosita es una mujer joven, tiene tres hijos y hasta antes del terremoto vivía junto a ellos en la zona de San Vicente⁴⁴. Allí arrendaba una casa la que tuvo que abandonar porque resultó gravemente dañada tras el sismo.

“Después del terremoto tuvimos que andar de casa en casa, la familia se dispersó, los chiquillos se fueron a la casa del papá, y yo con la Cony- se refiere a su hija menor- nos fuimos a la casa de una amiga, después donde un hermano hasta que encontré una pieza; bueno, en realidad era un negocio, como estaban

⁴⁴ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Rosa Pastén, damnificada residente en Aldea Rocuant de Talcahuano. Diciembre de 2012.

caros los arriendos (...). Ahí estuve hasta que me vine a la mediagua acá”, explica Rosita.

Perdió su trabajo después del terremoto y pudo subsistir gracias a la ayuda del padre de su hija menor. Cuando se trasladó a la vivienda de emergencia se llevó a sus otros hijos a vivir con ella.

Rosita es delgada y con sus ojos y tez clara. Su mirada expresa tristeza, después del terremoto también sufrió la pérdida de un hermano, quien tuvo un accidente en el camión que trabajaba.

Aunque intentó diversas formas, a Rosita Pastén le resultó muy difícil adaptarse: “Se me caían las lágrimas porque la gente era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, no es por desmerecer pero aquí hasta los niños de seis años hablan groserías”, cuenta.

Rodeados de carencias

El estilo de vida de una aldea, afirma Rosa, está lleno de deficiencias. La principal complejidad en su caso también ha sido el tema de los baños y haber tenido que salir de su hogar para ducharse o bañar a su hija menor.

El camino después del terremoto parece haberse hecho más difícil para esta jefa de hogar. Reconoce que no tienen un espacio para cada uno de los

integrantes de su grupo familiar. Intentan mantener su privacidad separando cada espacio con cortinas, las que delimitan un dormitorio del otro. Sin embargo, al ser un espacio tan reducido, se hace sumamente difícil conseguir ese objetivo.

Rosita agrega: “Donde arrendábamos, cada uno de nosotros tenía su dormitorio, era una casa de dos pisos, tenía baño con agua caliente, un inmenso patio, cocina grande, el living, siempre buscando la comodidad para todos, como debe ser. Claro, yo me esforzaba, trabajaba pero así como me esforzaba, también era mi calidad de vida. En la aldea corres el riesgo de que haya ratas o que se generen infecciones gastrointestinales por la acumulación de basura, estás propensa a todas las enfermedades. Lamentablemente aquí es así”, dijo.

“En el verano como es un terreno húmedo, hacen panales las moscas. De repente se rebalsan los alcantarillados y eso te atrae infecciones porque el terreno se ensucia”, explica Rosita.

Una característica que llama la atención de la aldea Rocuant es que se encuentra cercada por una muralla e inserta en un sector residencial de la comuna de Talcahuano. El muro tiene dos puertas que por lo general están abiertas, evitando que se cumpla el objetivo de seguridad para el cual se instalaron. Rosita maneja sus propias teorías:

“Estas murallas supuestamente las pusieron por protección, para prevenir la delincuencia, pero todos sabemos que no es así. Acá hay casas muy bonitas:

condominios, villas y a ellos también les ha perjudicado que esté un campamento en medio, les baja el precio a sus casas. De primera, estos vecinos no querían nada con nosotros, para ellos, somos delincuentes, personas que se aprovechan del sistema, conflictivos, drogadictos y traficantes. En cierta forma no están equivocados, hay de todo, pero lamentablemente por estar aquí me metieron al mismo saco”, indica.

Si bien la mediagua cumplió con la necesidad de otorgar un techo a los damnificados, deja a la vista todo tipo de carencias y falencias; desde aspectos técnicos, como su correcta instalación, hasta las consecuencias psicológicas que han enfrentado las familias a causa, entre otras cosas, de la dramática disminución de su calidad de vida.

La esfera pública y privada de los damnificados se ha visto severamente afectada. Su espacio privado se vio relegado a 18 metros cuadrados, que por lo general deben compartir con más de una persona, mientras que debieron volcar al espacio público situaciones que hasta antes del terremoto estaban resguardadas en la esfera íntima. Un acto tan sencillo como tomar una ducha se convirtió en algo estresante donde cada damnificado se vio obligadamente expuesto ante sus vecinos.

“A todas las familias nos marcó el terremoto. Yo me pongo a pensar y nunca pensé vivir en un campamento. Si años atrás tú me hubieras preguntado qué era un campamento, te habría dicho que era donde estaba la gente marginal,

la gente de bajos recursos, acostumbrada a la delincuencia a distintos tipos de cosas: eso era para mí un campamento. Imagínate, mi hija llegó acá cuando tenía 5 años y va a salir de aquí cuando tenga 9 o 10. El día de mañana, cuando tenga 15 y converse con sus amistades va a decir: 'Yo me acuerdo cuando viví en un campamento, cuando salía a jugar con todos los chiquillos'. De repente siento que mi hija no llevó una niñez normal", comenta Rosita.

La estación más dura

No hay opinión que sea diferente en este aspecto. Todas las personas entrevistadas concuerdan en que es el invierno, sin duda alguna, la época más dura para los damnificados de las aldeas. Las mediaguas no fueron diseñadas pensando en el hostil clima del sur de Chile y menos considerando que gran parte de estas serían instaladas en zonas costeras.

A medida que se recorren los distintos asentamientos, surge la pregunta: ¿Cómo es posible que estas viviendas resistan temporales de viento y lluvia? La respuesta: gracias a la ayuda mutua entre los afectados.

Voladuras de techo, el frío colándose por entre los paneles de las mediaguas, el agua, el barro bajando por las laderas de los cerros en los que algunas están instaladas son una postal fácil de apreciar.

Julia Cerda recuerda con especial sensibilidad el primer invierno que pasó viviendo en la aldea: “Lo pasamos re mal porque las mediaguas se llovían todas, entraba el agua por todos lados, harto frío. Pero si a un vecino se le pasaba el techo íbamos todos a ayudarlo”, señaló.

Benilde Gutiérrez es otra de las damnificadas que dejó este terremoto y vive en la aldea Coihueco de Penco. Su grupo familiar lo componen cinco personas quienes en un comienzo vivían solo en una mediagua y después de un tiempo lograron conseguirse otra para anexarla. Sin embargo, eso no evitó que la humedad del invierno causara estragos en los pocos muebles que tenía.

A 30 kilómetros de Concepción se encuentra la comuna de Coronel donde vive Aida Campos. Según el Minvu, en este lugar se instalaron quince aldeas de emergencia, entre ellas, Santa Elena, ubicada en el cerro Corcovado en la misma ciudad.

El lugar en el que está emplazada la aldea es sumamente hostil; enclavada en la cima del cerro donde el viento se siente con fuerza. Para llegar a este sitio hay dos opciones: se puede tomar un colectivo que mínimo cuesta 300 pesos, o bien, hacer el trayecto caminando, lo que significa subir el cerro.

Aida cuenta que vivió cerca de un año en una carpa y recuerda que en ocasiones se ayudaban entre todos los vecinos porque estas salían volando a causa de los temporales.

En una primera instancia, Aida y las familias de Santa Elena recibieron baños químicos, lo que mejoró con la instalación de los *containers*. Además, asume que con el tiempo la aldea se ha arreglado ya que entre los mismos vecinos han ampliado sus mediaguas y han recibido ayuda del Estado para forrarlas y arreglar los techos.

En Talcahuano el panorama es similar, Rosita cuenta que a pesar de que ha tratado de reparar su vivienda, las mediaguas son frágiles y se filtra el viento por todos lados. “En el lugar que me tocó a mí me da todo el norte, entonces estoy prácticamente en un congelador”, indicó.

Para mantener temperada de la mediagua Rosa utiliza parafina y leña, aun así afirma que no logra su objetivo. “En pleno invierno llueva o truene tenemos que salir sí o sí al baño; a un niño a lo más lo vas a dejar hacer en un tacho, pero nosotros que somos grandes salimos. Pero si a mi hija chica le da a las siete de la mañana dolor de guatita, es difícil que la saque al baño, entonces qué hace uno: tratar de que no se moje, que no se vaya a resfriar. Yo como hice una ducha allá atrás- se refiere a la parte posterior de su casa- trato de no llevarla para afuera, pero eso para mí es totalmente denigrante, lo encuentro deprimente total. Nunca pensé que mi hija iba a estar haciendo en un tacho”, sentencia Rosita.

“Yo trato de estar cada día mejor, porque estar en un espacio tan limitado deprime. Uno quisiera tener todo bonito y dentro de su casa”, dice Rosita.

“Distintos tipos de gente”

Otro punto en el que concuerdan las personas entrevistadas es que las aldeas fueron constituidas con personas de distintos barrios de la ciudad, lo que también significa diversas costumbres.

Algunos reconocen que al interior hay problemas de drogas y violencia intrafamiliar; otros comentan que existen conflictos entre los vecinos por tener diferentes historias de vida.

Rosita ha vivido de cerca esta situación; su hijo mayor- Franco- tuvo problemas con un grupo de jóvenes de la “aldea” que habían amenazado con pegarle.

Reconoce que intentó adaptarse al grupo, trató de insertarse y acostumbrarse al estilo de vida de la “aldea”. “Siempre mi mirada fue ir saliendo de lo que estábamos, ir superando las etapas para poder tener un mejor estilo de vida. Mi pensamiento era armar un comité y meternos en una constructora, que juntáramos plata e hiciéramos beneficios”, indica.

Rosa cuenta que intentó colaborar con la ayuda del padre de su hija menor: “Él trabajaba en los barcos y a veces traía pescados y los donaba para que hiciéramos beneficios y juntáramos todos plata en la libreta de ahorro para la vivienda, pero hubo un grupo de personas en la aldea que se conformó con la

solución que entregaría el gobierno y no quiso trabajar por tener algo mejor”, aclara.

Por su parte, Jacqueline⁴⁵, de Penco opina: “Hay gente que es súper buena pero también hay otra con la que no se puede contar para nada. Cuando llegué aquí una vecina me pasó a pedir una zanahoria, yo dije ‘mamá sabe que una vecina me vino a pedir una zanahoria’, porque uno está acostumbrado a ir al negocio y si no tienes; no tienes no más. Ahora ya me acostumbré al sistema, porque uno se va adaptando para no tener problemas, te acostumbras al *boche*⁴⁶ a todo”.

Julia Cerda también se ha visto enfrentada a este tipo de diferencias entre sus vecinos. Comenta que en cada reunión todos se ponían de acuerdo en las reglas para respetarse y un largo etcétera: “Pero de repente el vecino de al lado se pone a tomar, sale a orinar afuera donde hay niños, entonces ni por más que en las reuniones uno diga esto y esto otro, todos con palabras de buena crianza, después al hombre *curao*⁴⁷ se le olvida”.

Un caso más extremo es el de Aida Campos de Coronel quien sin entrar en mayores detalles, cuenta que un año y medio después del terremoto perdió a su

⁴⁵ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Jacqueline Torres, damnificada residente en Aldea Coihueco de Penco. Diciembre 2011.

⁴⁶ Se refiere al ruido.

⁴⁷ Se refiere a una persona en estado de ebriedad.

marido, quien falleció víctima de un asesinato cometido, según señala, por personas que viven en la misma aldea.

María Garrido en El Molino

María Garrido es una de las mujeres que adquirió gran liderazgo en Dichato. Junto a su esposo, Orlando Bello y a sus dos hijos; Giovanni y Camila, llegó a vivir a la aldea El Molino después del terremoto.

El camino que ha recorrido a la espera de la reconstrucción es duro. María, igual que muchos de sus vecinos, tuvo que vivir largos cinco meses en carpa, hasta recibir su vivienda de emergencia.

Se define como una luchadora, y esa es la imagen que proyecta. Es una mujer morena, de baja estatura pero que se ve aguerrida. No teme decir lo que piensa y tampoco está dispuesta a rendirse ante los golpes que la vida le ha dado.

Desde aquel 27 de febrero, cuando el terremoto y especialmente el tsunami destruyeron en un segundo su esfuerzo de años, la vida de María Garrido nunca más volvió a ser la misma. Recuerda que a un par de días de ocurrida la tragedia, junto a un grupo de personas decidió ir caminando a Concepción en busca de ayuda. Fue así como comenzó a tomar liderazgo en la zona.

Líder innata

A su regreso desde la capital de la región del Bío-Bío, en su tierra la recibió una dura realidad. Aquella que la tendría durante años viviendo, primero en carpa y luego en su mediagua a la espera de las soluciones.

Para reunir algo de dinero, gracias a que tenía un pequeño pozo, María Garrido comenzó a lavar la ropa de sus vecinos, quienes hasta ese momento no tenían agua.

Después de cinco meses, ella y su familia se trasladaron a la mediagua de El Molino. El proceso de adaptación a esta nueva realidad no fue fácil. María reconoce que una de las cosas que más le costó fue caminar casi dos cuadras en busca de agua o verse en la obligación de usar un baño químico: “De repente, a media noche salir toda mojada, enterrada en el barro al baño, o estar ahí y que esté el vecino esperando es súper incómodo”, expresa.

María jamás imaginó todos los obstáculos que tendría que enfrentar. Además de batallar día a día con las inhóspitas condiciones que le impuso la aldea, tuvo que hacer frente al desafío más grande y doloroso de su vida: su esposo Orlando Bello sufrió un infarto cerebral el 21 de abril de 2011 que lo mantuvo postrado durante un año. Falleció el 29 de abril de 2012.

Con 60 mil pesos de pensión, más los ingresos de su trabajo limpiando mariscos y otras tareas esporádicas, María tuvo que lidiar con la enfermedad de Orlando y dar los cuidados necesarios sobreponiéndose a las dificultades sanitarias que implica vivir en una mediagua.

Se entristece al recordar a su “viejito”, su esposo, quien murió a los 69 años. Aunque de a poco ha superado la pena, la invaden los recuerdos de esos días en los que necesitó ayuda. El hecho de que su marido no alcanzara a ver su casa nueva, es un dolor que llevará para siempre.

“Se me fue mi viejito, se me fue mi marido, nunca aceptó la pérdida. De tener tantas cosas, pasar a una mediagua. Estaba acostumbrado a una casa cómoda con todo adentro, pero el mar se lo llevó todo y él no lo pudo superar”, expresa con tristeza María Garrido.

Sumada a la enfermedad de Orlando, su situación se vio agravada por ataques que recibió, según cuenta, por parte de “operadores políticos” entre quienes estarían sus mismos vecinos. María narra que durante 2011, cuando su esposo ya se encontraba postrado, entraron a robar a su casa. Durante ese año, agobiada por los problemas, intentó suicidarse.

Cuenta que su hijo también ha sido víctima de ataques y malos tratos por parte de alguno de sus vecinos de El Molino. El agobio es tal, que evita salir de su casa. “Acá arriba atacan fuerte”, afirma.

Otra de las consecuencias que debe enfrentar esta mujer es que su hija menor, Camila, se fue a vivir con los abuelos: “Quedó *shockeada* con todo lo que pasó y no quiere volver a la aldea”, indica.

María Garrido agradece no tener mayores problemas con el acceso a los servicios higiénicos ya que por la enfermedad de su marido le instalaron un baño en su terreno. A pesar de que eso facilitó en algo su vida, reconoce que uno de los principales problemas en la aldea es el agua y la pérdida de privacidad. Acá todo lo que discute se escucha y todo lo que se hace, se sabe”, señala.

Sus esperanzas

María señala con fuerza que no piensa quedarse como está viviendo. Ella quiere trabajar, salir adelante, luchar por darles un mejor futuro a sus hijos.

Tiene claro que la solución que le entregará el gobierno no será como la casa en la que vivía hasta antes del terremoto, pero se conforma. Sin embargo, con todo lo que ha pasado, María ya no confía en las autoridades ni tampoco en los líderes de la comuna. Cataloga el proceso de reconstrucción como “horriblemente malo” y no cree en ninguno de los anuncios realizados por el Presidente Piñera, que constantemente entrega auspiciosas cifras en materia de reconstrucción.

Como miembro del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, María Garrido ha liderado diversas movilizaciones para poner a Dichato en la palestra y le ha resultado. Esta localidad fue una de las que más recibió ayuda y que cada cierto tiempo aparece en la agenda noticiosa. Ella reconoce que algunos se aprovecharon y tendrán, gracias a eso, una vivienda del Estado.

Otros de los temas que la afectan es recordar cómo con el paso del tiempo han muerto personas en la aldea, quienes jamás alcanzaron a ver la reconstrucción: “Estamos quedando viudas y viudos por todos lados”, afirma.

María se cansó de las promesas incumplidas: “Si no fueron capaces de ayudarme en los meses más difíciles de mi vida, cuando mi marido estuvo enfermo, menos lo van a hacer ahora”, expresa.

Con la voz quebrada y los ojos al borde las lágrimas, comenta que para ella, todo el tiempo que ha pasado después del terremoto ha sido malo, siente que son muy pocas las alegrías que ha tenido y que la vida ha sido dura.

María Garrido es una de las personas, que como muchas ha estado durante casi cuatro años a la espera de la reconstrucción, cansada por el camino que tuvo que recorrer, pero anhelando que este proceso finalice pronto para todos. Considera que se ha jugado con las ilusiones y esperanzas de los damnificados, quienes esperaban que las soluciones llegaran mucho más rápido, de manos de

autoridades que fueron enfáticas en promocionarse como un gobierno de excelencia.

Villa Futuro, en el saco de los damnificados

Villa Futuro es un conjunto habitacional ubicado en la ribera del río Bio- Bío, en la comuna de Chiguayante. Construida en 1984 como parte del plan de viviendas sociales de la dictadura, los 29 blocks de 48 departamentos cada uno, soportaron el segundo mayor terremoto en la historia de Chile.

Aunque los departamentos presentaron fallas desde el mismo día de su entrega, filtraciones, roturas de cañerías, entre otros, estos resistieron el sismo, pero el temor que generó el gran remezón, y la historia previa de la villa, llevaron a los propietarios a preferir vivir en carpas durante algunas semanas. Una vez recuperada la confianza los vecinos comenzaron a volver a sus hogares.

Al caminar por este lugar da la impresión de que el terremoto hubiera causado grandes estragos, sin embargo, solo uno de los blocks sufrió fallas estructurales. Aunque el daño fue menor, considerando el volumen de viviendas, pocos meses después de ocurrida la tragedia se anunció la demolición del conjunto habitacional, con la promesa de la entonces intendenta Jacqueline van Rysselberghe, de que se construiría una nueva y mejor villa para los vecinos. Algo que aún no ocurre.

Tras el anuncio de van Rysselberghe, los vecinos comenzaron a desarmar sus departamentos y bajaron hacia la aldea de emergencia, situada a orillas del río.

Bárbara Orrego es presidenta de Villa Futuro; durante todo este tiempo ha representado a sus vecinos, defendiéndolos de lo que para ella, es un engaño⁴⁸. Bárbara es decidida y una líder de tomo y lomo. Morena, de pelo crespo y baja estatura, me recibe en la sede social de su Villa, donde constantemente somos interrumpidas por vecinos que le preguntan sobre los más variados temas.

Bárbara comienza a reconstruir la historia. Recuerda que en 2010 se realizaron estudios de suelo por mandato de la intendencia cuyos resultados arrojaron que los terrenos estaban aptos para la construcción pero que los departamentos ya habían cumplido su uso por lo que serían demolidos para la construcción de otros. El anuncio fue muy bien recibido por los vecinos.

El objetivo era demoler en noviembre de 2010, por ello, según cuenta Bárbara Orrego, se exigió a todas las personas que abandonaran sus departamentos; situación que generó la oposición de los habitantes de Villa Futuro.

“Nosotros veíamos que nuestros departamentos no tenían ni una raya, no éramos la prioridad en ese momento. Veíamos que estaba Talcahuano, Dichato, que estaban súper mal, donde había llegado el tsunami. Aquí no llegó tsunami, no

⁴⁸ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Bárbara Orrego, residente de Villa Futuro de Chiguayante. Diciembre de 2012.

se perdió nada y por eso creíamos que la prioridad eran los damnificados, pero la intendenta llenó de mediaguas la orilla del río y como la gente empezó a ver que había comida, que había cositas, una cocinita, decidieron bajar de sus departamentos. Se aprovecharon del terremoto y nos metieron en el saco de los damnificados”, afirma Bárbara.

Mientras se esperaba la demolición de esos condominios la intendencia propuso que los damnificados de Villa Futuro bajaran a la aldea instalada bajo sus puertas, o bien, buscaran un hogar por cuenta propia mientras se realizaban las obras. Esta última solución fue planteada para aquellas personas que no contaban con un certificado de inhabilitación, es decir, la mayoría. Casi cuatro años después del terremoto estos condominios aún no son demolidos.

Un problema para los habitantes de Villa Futuro es que la mayor parte de las familias firmaron un documento en el que entregaran su propiedad al Serviu sin posibilidad de retractarse. Esto los obliga a tomar uno de los cuatro tipos de subsidios emitidos por el Minvu. Según cuenta Bárbara, el plan al que más se acogieron los vecinos contempla un total de 700 UF, alrededor de 15 millones de pesos. Una vez firmado el acuerdo, las personas tenían un plazo de cuatro meses para abandonar el departamento.

Bárbara Orrego explica lo que a su juicio ocurrió como consecuencia de esta solución gubernamental: “La gente se formó en grupos, pero de los quince millones solo recibieron diez porque los otros cinco eran para comprar el terreno, contratar una empresa constructora que urbanizara el sitio, entonces ¿Qué

hicieron? Agarraron su plata y se compraron un auto, se tomaron los departamentos, se fueron a vivir de allegados o a las mediaguas y quedaron para siempre sin casa. ¿Sabes lo que significa 10 millones de pesos en la mano para un pobre, que no ha tenido nunca nada? Se volvieron locos”, sentencia.

Cada departamento que ha quedado deshabitado debe ser desmantelado por sus dueños. Esta situación genera otra preocupación en torno a la seguridad de las viviendas aledañas y de las familias que continúan residiendo en villa Futuro.

Además, los departamentos que se encuentran deshabitados han sido tomados por otras personas que, según indica Bárbara, van desde narcotraficantes hasta las familias que realmente necesitaban un hogar, lo que generó focos de delincuencia y también de infecciones.

Para la presidenta de Villa Futuro la grave falta de seguridad ha sido lo que más ha quebrantado a sus vecinos, puesto que optan por cuidar la integridad de sus familias antes que quedarse en el conjunto. “El terremoto no hizo tanto daño como lo que está haciendo el Gobierno”, afirma.

En este sentido, para Bárbara Orrego es decepcionante ver cómo sus propios vecinos abandonaron sus departamentos y bajaron a la aldea donde las condiciones de vida son mucho peores. Se pregunta si solo fue por recibir una caja de alimentos mensual o por acceder a la gratuidad en los servicios básicos.

En Villa Futuro el proceso de Reconstrucción se siente como un engaño, esta dirigente dice que se ha jugado con las esperanzas de la gente, mostrándoles

proyectos y metas que fueron aplazándose una y otra vez: “El cambio no fue para mejor. Los vecinos que firmaron fueron engañados como corderitos llevados al matadero y están arrepentidos, pero ya es demasiado tarde. Se dieron cuenta de que lo que van a hacer acá es un parque borde río, una carretera que viene desde Concepción y que revela la alta plusvalía que tiene el terreno. Entonces ellos ahora se deben estar preguntando ¿Por qué nos sacan de aquí para hermostrar y darle otro valor al terreno?”.

Esta sensación de discriminación se suma a la falta de apoyo y desconfianza hacia sus autoridades locales y gubernamentales: “Acá destruyeron la comunidad que nosotros teníamos, a fuerza de engaño”, sentencia Bárbara. “Como Villa Futuro sentimos que esto ha sido un gran aprovechamiento del gobierno que nos calificó como damnificados del terremoto cuando no es así”.

Bárbara Orrego cree que si hubiera sido otro el gobierno las cosas serían distintas. Piensa que estarían reparando sus departamentos y no en la condición de damnificados que los tiene en la incertidumbre sobre cuándo serán demolidos sus hogares, que a pesar de no haber resultado destruidos por el terremoto, también han debido esperar la llegada de la reconstrucción.

CAPÍTULO V

Una oportunidad que se dejó pasar

“Los desastres ofrecen oportunidades para la protección y promoción de los derechos humanos, aunque también riesgos. En los casos más graves, sirvieron de excusa a agentes poderosos para destruir viviendas o apoderarse de tierras, lo que no hubiera sido posible en el contexto anterior a los desastres”.

Informe Relatoría ONU. Agosto de 2010

El Plan de Reconstrucción Chile Unido Reconstruye Mejor generó una serie de cuestionamientos desde las agrupaciones de afectados por el terremoto y organizaciones de la sociedad civil que han seguido paso a paso el proceso.

Uno de los primeros inconvenientes o críticas que este plan presenta son los instrumentos solicitados para acreditar la condición de damnificados y la situación socioeconómica de los afectados por el terremoto y tsunami. Según el informe *Terremoto en Chile: Una primera mirada*, estos no fueron los adecuados y entorpecieron el proceso, más que facilitararlo.

Con la aplicación de los criterios establecidos por el Minvu, como el registro en la DOM y los requisitos para ser considerada como una familia allegada, quedaron fuera de poder optar a soluciones estatales cientos de familias.

Según la investigación realizada por los periodistas Juan Pablo Echeñique y Pedro Ramírez publicada en el diario electrónico Ciper Chile en febrero de 2011⁴⁹, las primeras cifras de gobierno indicaban que sólo un 55 por ciento de las familias que residen en mediaguas calificaban para obtener un subsidio como damnificados por el terremoto.

Los radicados en “aldeas” que no tendrían subsidio son aquellos que no pudieron acreditar su condición de damnificados, que tienen otra vivienda o que no cumplieron con alguno de los requisitos establecidos por el gobierno.

Con en el objetivo de focalizar mejor los recursos, asistiendo a las personas de mayor vulnerabilidad, el gobierno indicó que los porcentajes elegibles, es decir, de personas pudieron optar a soluciones estatales. De un total de 217 mil 469 viviendas destruidas o severamente dañadas, 173 mil 944 cumplían con los criterios de elegibilidad, es decir, el 62 por ciento fue objeto de subsidio.

Otro de los puntos que genera cuestionamientos al analizar el Plan de Reconstrucción es que en uno de sus primeros enunciados reconoce que “solo con la colaboración de todos, partiendo por los damnificados, pasando por los municipios, gobiernos regionales, universidades, ONGs, empresas privadas, juntas de vecinos y una larga lista de chilenos comprometidos, podremos cumplir con esta titánica labor”.

⁴⁹ Ciper Chile. *El 40 por ciento de los residentes en “aldeas” no obtendrá vivienda definitiva*. Publicado en febrero de 2011.

La opinión de damnificados, de expertos e incluso informes internacionales; concuerdan en que esta participación no ha sido más que un recurso discursivo que en realidad no se ha visto aplicado. Aun cuando desde la sociedad civil surgieron diversos esfuerzos por ser parte activa del proceso de reconstrucción de sus hogares, la participación se ha visto reducida a la elección de una vivienda.

Según el informe *Políticas Públicas de Vivienda en el Proceso de Reconstrucción de la Región del Bío-Bío*, realizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción en la localidad de Dichato en 2011⁵⁰, “No existen canales formales de comunicación que permitan generar puentes de relaciones entre los damnificados y el gobierno, además de la ‘imposición de medidas, sin consulta’, lo que genera rechazo entre los destinatarios”

Según ese estudio, un 75 por ciento de las personas consultadas sentía en ese momento que no había participado activamente en el proceso de reconstrucción, ni se habían acogido sus iniciativas; un 71,6 por ciento creía que los pobladores no habían sido escuchados y un 76,6 por ciento no se consideraba valorado por el Gobierno; a su vez, un 72,5 expresó que no existía comunicación real con el Gobierno central y que no se participó en el diseño e implementación del plan de reconstrucción de vivienda

⁵⁰ Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Políticas y Administrativas. (2011). Políticas públicas de vivienda en el proceso de reconstrucción de la re del Biobío. Caso de estudio la localidad de Dichato. Bucci Ancapi, F., Chales Aoun, B., Figueroa Mardones, M., González Merino, S., y Gutiérrez Cortés, K., p. 6.

El mismo informe de la Universidad de Concepción señala que “no es la necesidad de los damnificados la que define el tipo y la forma de gestión de los subsidios, sino la oferta del mercado inmobiliario, lo que ha significado que muchas familias (damnificados residentes) se vean obligadas a abandonar los barrios que han habitado desde hace décadas, puesto que las inmobiliarias no tienen propuestas para ellas en esos barrios, debido al alto precio del suelo (...) El futuro para estas familias (...) es abandonar los barrios y trasladarse a la periferia de la ciudad, en espacios segregados”.

El informe “*27 F Estudio sobre la reconstrucción Post Terremoto desde una perspectiva de Derechos Humanos*⁵¹”, realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aporta datos en este sentido. Indica que “existe la opinión unánime respecto de que hay un déficit importante en derecho a la consulta y la participación de las personas y comunidades afectadas en los procesos de toma de decisión y en la ejecución de planes y medidas del proceso de reconstrucción. Agrega que a eso se suma la dificultad de acceder a la información”.

Un caso emblemático en torno a la demanda por participar en la reconstrucción lo constituye la ciudad de Talca. Aquí el terremoto del 27 de febrero literalmente tiró al suelo años de historia; desplomó el centro y el casco histórico de la ciudad, cuya característica principal era la heterogeneidad de su población:

⁵¹ Instituto Nacional de Derechos Humanos (2012) “27F” Estudio sobre la reconstrucción desde una perspectiva de derechos humanos, primera parte. [en línea] <http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2012/07/informe-reconstruccion-indh.pdf> [consulta: 19 de marzo de 2013]

allí residían familias adineradas pero también personas pobres cuyas viviendas y terrenos constituían su principal activo social.

La localización de esas viviendas era privilegiada; quienes residían en el centro no gastaban en transporte, contaban con los servicios públicos cercanos a sus hogares y un conjunto de otros beneficios que han perdido con la reconstrucción.

La capital de la región del Maule fue sin duda una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Tal vez sea esta la razón por la que la ciudadanía mostró desde el primer momento gran interés por formar parte activa del proceso de reconstrucción, brindó apoyo en la emergencia inmediata, creó organizaciones y movimientos civiles, elaborando propuestas de cómo querían el restablecimiento de su ciudad.

La iniciativa de medios locales e independientes

Fue así como a pocas semanas del terremoto se organizó en la ciudad una mesa de trabajo convocada por el diario local, *El Centro*⁵², uno de los pocos medios que no pertenece al duopolio de la prensa nacional El Mercurio-La Tercera, y que sesionó aproximadamente durante cinco meses.

⁵² El Diario El Centro se creó en 1989 y es propiedad de la familia Aldana Norambuena. Su actual director es José Álvarez Espinoza

La iniciativa del diario El Centro no es un hecho aislado, según el Informe “*Radios comunitarias en situación de catástrofe en la Región del Bío-Bío*”, realizado para el ramo de Seminario de Investigación en Comunicación, de la carrera de Periodismo, Universidad de Chile⁵³, los medios comunitarios⁵⁴, específicamente las radios, también tuvieron un rol preponderante en la emergencia inmediata. No sólo “editorializaron sus contenidos desde la catástrofe en base a informar y llamar a la calma a la población”, sino que a su vez, atendieron las necesidades más inmediatas como respecto del estado de las familias del sector, e incluso repartir comida y enseres básicos.

La Radio Lorenzo Arenas de Concepción⁵⁵ es un ejemplo de ello. Esta emisora funcionó con sus parlantes en la calle para convocar a los vecinos. En este sentido, el director de radio Lorenzo Arenas, Gabriel Rojas, señaló: “Nosotros fuimos bastante útiles y tuvimos sentido de ubicación, porque no nos gusta quedarnos ahí parados adelante buscando protagonismo. Quisimos hacer bien la pega de coordinar; hacer de puente entre autoridades y vecinos”⁵⁶

⁵³CÁCERES, K. LIZAMA, M. VALERIA, N. VEGA, V. (2010) *Radios comunitarias en situación de catástrofe en la Región del Bío Bío* Seminario Investigación en Comunicación. Universidad de Chile.

⁵⁴Según el autor Ignacio López Vigil un medio comunitario: “Promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogeneización mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un aviso publicitario” (López, 1997).

⁵⁵ Radio Comunitaria que inició sus transmisiones en el año 2000 en la comuna de Concepción, en la población Lorenzo Arenas. Su línea editorial pone énfasis en temas comunitarios, culturales e informativos dirigidos al sector donde llega la señal.

⁵⁶ Entrevista realizada para Seminario de Investigación en Comunicación. Concepción.2010. Entrevistadores: Marilyn Lizama, Nicole Valeria.

A la mesa de trabajo convocada por el diario *El Centro*, acudieron distintos actores sociales, entre ellos autoridades locales, organizaciones vecinales y ONGs de la ciudad. Este grupo de entidades propuso al municipio desarrollar un modelo de gestión de reconstrucción basado en la creación de una Corporación de Desarrollo Urbano Sostenible, que integrara aportes de entidades, empresas y de la sociedad civil.

Entre los involucrados en esta propuesta se encontraban el Colegio de Arquitectos de Talca, la ONG Surmaule, la Universidad de Talca y la Católica del Maule, entre otros actores locales. Dentro del proyecto que se quería implementar contarían con la ayuda de Jordi Borja, geógrafo y urbanista español, y, principal experto mundial en la recuperación de barrios.

La iniciativa centrada en la recuperación de barrios históricos fue aprobada en pleno por el concejo municipal, sin embargo, poco después de una semana de firmado el acuerdo, el edil Juan Castro, sorprendió a la ciudadanía entregando el Plan de Reconstrucción a la inmobiliaria El Bosque S.A, propiedad del grupo Hurtado Vicuña⁵⁷.

Entre los objetivos planteados por esta inmobiliaria está la reconstrucción de viviendas en sitio propio y la reconstrucción de manzana que “promueva el

⁵⁷ Juan Hurtado es presidente de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y socio del Consorcio Nacional de Seguros, Mina Punta del Cobre (Pucobre). Además desde 2009 es uno de los principales dueños de la Universidad Santo Tomás.

re poblamiento y densificación del centro”. Eso significa la construcción de grandes edificios inexistentes hasta antes del terremoto.

El alcalde cuando rechazó el plan presentado por la ciudadanía y optó por el grupo encabezado por Juan Hurtado Vicuña señaló:

“No ha habido ningún otro plan de reconstrucción excepto el que hizo la empresa El Bosque, que yo acepté porque es un aporte del grupo Hurtado Vicuña, aquí estaba la intención de hacer algo interesante como reconstrucción. Lo que se presentó esa vez en el concejo fue una exposición de unas personas que al final no tenían nada claro sobre cómo iniciar este proceso, por lo tanto, cuando llegó el grupo Hurtado yo me sentí muy contento y muy feliz porque es gente profesional. Yo no podía entregarles una responsabilidad tan grande a personas sin capacidad ni responsabilidad para poder enfrentar un plan maestro.”⁵⁸

La decisión personal del alcalde generó la preocupación de las demás autoridades comunales pues esta inmobiliaria se especializaba en la expansión urbana, es decir, en el desplazamiento de la población hacia la periferia más que en la recuperación de barrios, algo que generó desconfianza en los habitantes de la ciudad.

⁵⁸ Entrevista realizada en septiembre de 2010 para del reportaje *“Los problemas de la Reconstrucción”*, realizado para la asignatura de Taller de Investigación Periodística.

Ante esto, otro de los dirigentes de Surmaule, el psicólogo y magíster en Psicología Social, Marcelo Gutiérrez⁵⁹, indica, que este plan no respondía a la emergencia que enfrentaba la ciudadanía sino que a ideas de muchos años antes, comprometidas con intereses inmobiliarios.

Francisco Letelier, sociólogo, explica que fueron este tipo de acontecimientos y el diagnóstico conjunto que se realizó del plan de reconstrucción nacional, uno de los principales factores por los que el equipo de Surmaule decidió tomar un rol activo en este proceso.

“Nosotros lo primero que hicimos fue un trabajo de apoyo psicosocial, comenzamos en la Plaza de Armas y seguimos en los barrios ayudando en emergencia llevando agua y alimento a ciertos sectores”, comenta Letelier.

Francisco Letelier indica que desde un primer momento se avizoraba “una reconstrucción de corte neoliberal con dos definiciones preocupantes; la no generación de una política pública adecuada y el protagonismo del sector privado, específicamente de grandes grupos económicos, que fueron los que desarrollaron los planes de reconstrucción”, señala.

En este sentido, para Letelier los privados tuvieron un rol incluso más importante que el Estado. Para el experto, no ha existido una adecuada

⁵⁹ Entrevista realizada en septiembre de 2010 para el reportaje “*Los problemas de la Reconstrucción*”, realizado para la asignatura de Taller de Investigación Periodística.

representación política de los intereses de los damnificados y el hecho de que no exista institucionalidad propia para la reconstrucción es una deficiencia estructural del modelo en el cual, el Estado ha actuado más como un facilitador del mercado que como articulador de la demanda ciudadana.

Otra de las iniciativas que surgió en la ciudad en torno a la reconstrucción, y debido a la preocupación por la inminente mercantilización de la catástrofe, fue la idea de organizar un Cabildo Ciudadano, este se creó en junio de 2010 por el movimiento social Talca con Todos y Todas.

Esta instancia fue un espacio de diálogo común en la que participaron distintas organizaciones y dirigentes de la ciudad. El objetivo de este cabildo fue entablar un diálogo social que les permitiera instalar a la ciudadanía como contraparte válida de las instituciones públicas y privadas vinculadas a la reconstrucción y desarrollo de la comuna.

Fue así como en agosto de 2010 se logró convocar a representantes de diversas organizaciones de Talca y de otras zonas del país. Una de las principales consecuencias fue que como resultado de esta reunión se conformaron once comisiones temáticas que posteriormente continuaron trabajando para entregar propuestas a las autoridades políticas y a la opinión pública.

En enero de 2011 Talca volvió a ser protagonista. Allí se realizó un encuentro Nacional denominado *“Experiencias ciudadanas para una*

reconstrucción justa”, en la que participaron delegaciones de las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Bío-Bío.

El encuentro tuvo como resultado la redacción de un documento denominado “Demanda Nacional por una Reconstrucción Justa”, en el que se sistematiza el trabajo hecho por las diversas organizaciones y donde se plantean las principales exigencias de los damnificados.

Esta reunión finalizó con el surgimiento de uno de los principales movimientos ciudadanos en defensa de los derechos de los damnificados; el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ) que tuvo entre sus logros; conseguir la visita de la Relatora Especial para el Derecho a la Vivienda de Naciones Unidas, Raquel Rolnik.

Velando por una reconstrucción Justa

Lorena Arce⁶⁰ es de Dichato y es una de las líderes del MNRJ. Tal como indica, “el objetivo de esta agrupación fue enfrentar de forma colectiva las necesidades inmediatas de los damnificados en sus respectivas localidades” junto con dar respuestas a nivel nacional y de forma unitaria y propositiva a las políticas gubernamentales en materia de reconstrucción.

⁶⁰ Entrevista realizada para esta Memoria a Lorena Arce, damnificada residente de Dichato, febrero de 2013.

El Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa ha contado con el apoyo de distintas entidades y organizaciones sociales, entre ellas el Observatorio de la Reconstrucción del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, ONG Sur Maule, Hábitat International Coalition (HIC), entre otros.

Esta agrupación logró sostener mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda, contribuyó a la generación de propuestas y apoyó directamente a los damnificados. Además organizó importantes manifestaciones ciudadanas como las protestas en Dichato, en julio de 2011, donde los habitantes de la localidad se tomaron el camino de acceso en rechazo a lo que consideraban un lento proceso de reconstrucción.

A las organizaciones emanadas desde la sociedad civil, también se suman las instituciones surgidas desde la academia, como es el caso del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile. Esta iniciativa de las facultades de Arquitectura y Urbanismo, Economía y Negocios, Derecho y el Instituto de Asuntos Públicos, tiene como propósito democratizar las discusiones en torno al proceso de reconstrucción y durante todo este tiempo, se ha encargado de generar instancias de participación y reflexión en torno a este tema.

El Observatorio de la Reconstrucción tiene una mirada crítica de cómo se ha llevado a cabo el proceso. Su preocupación apunta al diseño de una reconstrucción centrada en la reposición de viviendas y no de comunidades. Un

programa enfocado en el caso individual más que en el problema colectivo y que carece de información clara para los damnificados.

Así lo siente Rosita Pastén de Talcahuano, para ella información no ha sido suficiente ni transparente. Afirma que quiere estar en un lugar seguro para ella y su familia pero que está consciente de que no puede optar a algo mejor: “Tengo que aceptar lo que me den”, indica resignada.

La opinión respecto de la falta de participación de la ciudadanía es generalizada. Ricardo Ruz, de Dichato, recuerda la visita de la experta de Naciones Unidas Raquel Rolnik a la zona. “Ella fue enfática en señalar que el concepto de reconstrucción no abarca solo la instalación de casas, sino que involucra el derecho a la ciudad”, afirma.

Para Ricardo Ruz no ha habido participación en esta tarea. “Acá no se ha consultado para efecto de los cambios de los planos reguladores, para los tipos de construcciones y soluciones que se les está dando a la gente”, no se ha consultado al poblador, al pescador, al artesano, al comerciante del turismo; simplemente ellos – se refiere a los empresarios- han aplicado su modelo”.

Francisco Letelier de Surmaule indica que con las soluciones ofrecidas por el gobierno las familias del casco histórico de Talca no recuperan la espacialidad de su vivienda original, lo que puede traer como consecuencia hacinamiento o el

éxodo de personas que vivían como familias allegadas. Una situación que ocurrió en Talca y que podría suceder en el resto de las ciudades afectadas.

El profesional señala que la capital del Maule es el campamento más grande de Chile, una aldea dispersa con mediaguas distribuidas por toda la ciudad, donde muchas familias quedaron en una situación compleja para acreditar su condición de damnificados, una de las causas: el desconocimiento del sistema público.

El diagnóstico es claro: “No se captó ni organizó la demanda de reconstrucción, por lo que mucha gente que alcanzó a inscribirse como damnificado nunca más logró trabajar con una EGIS, o con una empresa constructora; porque no había interés en trabajar con ellas. Se dejó que los damnificados negociaran solos con el sector inmobiliario entregando a las constructoras la posibilidad de dar una solución al interior de un conjunto habitacional de la periferia”, explica Letelier.

Una de las consecuencias que visualizan desde Surmaule es que las familias al no tener recursos para realizar reparaciones definitivas optarán, o ya han optado, por vender sus terrenos y migrar a otros sectores de la ciudad. En este sentido, Francisco Letelier señala: “El mercado ha esperado pacientemente que se ordene y configure la demanda, que se entreguen los subsidios y que las personas acumulen desesperación. La idea de quedarse en sus barrios se ha transformado para muchos en una utopía impensable”.

Este problema ya había sido confirmado por el ex subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Andrés Iacobelli. Según cita el artículo *Los Desplazados de la Reconstrucción*⁶¹, la autoridad reconoció que no existían “terrenos lo suficientemente baratos en lugares como el Gran Concepción o el centro de Talca, con los montos entregados por el Gobierno”. Señaló que “con un poco más 600 UF por familia, solo alcanza para hacer viviendas nuevas en grandes terrenos que antes eran agrícolas, en las afueras de la ciudad.

En este sentido, Francisco Letelier indica que: “cuando el Estado no se hace cargo de los problemas, los que asumen el costo son las personas, las familias y la sociedad; entonces hoy existe un problema de hacinamiento y allegamiento serio pero que es invisible porque la gente también trata de continuar con su vida, pero el problema se mantiene”, expresa.

Solo basta pasar por las afueras de Talca para apreciar que es una ciudad en expansión que posee grandes proyectos inmobiliarios instalados en la periferia, a pesar de los intentos de participación que surgieron de la ciudadanía, los damnificados continúan considerando que es un proceso carente de información clara respecto de las soluciones definitivas que entregó, o entregará, el Estado.

⁶¹ “*Los Desplazados de la Reconstrucción*” Artículo en sitio web del Observatorio de la Reconstrucción en <http://reconstruccion.uchilefau.cl/2011/04/los-desplazados-de-la-reconstruccion/>

Los privados, protagonistas de la reconstrucción

Otra de las aristas que es constantemente analizada y cuestionada por las agrupaciones sociales es la excesiva participación que se la ha otorgado al sector privado.

Ejemplo de ello son los Planes de Reconstrucción Estratégica Sustentable, realizados por empresas con intereses en los territorios, o por lo menos con operaciones en ellos, como es el caso del grupo Arauco en Constitución.

El Plan de Reconstrucción reconoce desde un primer momento la importancia de la colaboración público-privada en esta tarea. Según Francisco Letelier en su publicación *“Talca post terremoto, el centro histórico en disputa”*, este modelo de reconstrucción centrado en la oferta y la demanda ha “generado ciudades segregadas y no se hace cargo de la merma en la calidad de vida urbana”.

Por otro lado, la asignación de subsidios no está exenta de complejidades puesto que los damnificados deben estar asesorados por una Entidad de Gestión Inmobiliaria (EGIS) cuya función es realizar la postulación de estos, diseñar los proyectos, adquirir los terrenos y licitar su construcción. En este proceso, es el Estado quien otorga el financiamiento pero no interviene en la gestión.

Entre las EGIS existentes, la mayoría corresponde a empresas privadas con fines de lucro, además de algunas ONG y fundaciones, municipios, y el SERVIU, en el caso específico de la reconstrucción de los condominios sociales.

En este sentido, tal como se menciona el *Informe para la Relatora Especial de Naciones Unidas*, elaborado por el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, uno de los motivos de estas empresas para involucrarse en este negocio son las grandes utilidades que pueden lograr.

Según especifica Lorena Arce⁶², estas empresas “trabajan con una demanda que está asegurada y con un monto de subsidio definido por el MINVU lo que puede implicar menos riesgo que vender viviendas donde la demanda depende mucho de la situación de la economía y el marketing”.

Felipe Rivera es ingeniero constructor y entre los años 2011 y 2012 se desempeñó como Inspector Técnico de obras, en una EGIS con “operaciones en Chillán, pero con casa matriz en Temuco”.

La empresa en la que trabajó prestaba servicios de postulación a los subsidios habitacionales de reparación, vivienda nueva y subsidio de aislación térmica. Una de las responsabilidades que Felipe ejecutaba era la elaboración y revisión de presupuestos para las familias, basado en tablas de precios y soluciones ofrecidas por el SERVIU. Una vez que los damnificados recibían el

⁶²Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Lorena Arce, damnificada residente en Dichato. Febrero de 2013

subsidio, la entidad debía encargarse de inspeccionar que las constructoras ejecutaran correctamente las obras y dieran cumplimiento a todas las especificaciones establecidas por contrato.

Según cuenta Rivera, gran parte del volumen de subsidios que manejó la EGIS en Chillán fue a raíz del terremoto de 2010. “Eran entre mil 500 y mil 700 personas distribuidas en las ciudades de Chillán, Quirihue, Coelemu y Cabrero”, dice.

A juicio de este ingeniero, la calidad de las soluciones entregadas no fue del más alto estándar, pues si bien los montos de los subsidios los daba el Serviu, “en varias partidas los precios estaban inflados lo que provocó que las constructoras tuvieran mayores utilidades a las ya detalladas en cada presupuesto.”

Durante el tiempo que trabajó en esta EGIS, Rivera fue testigo de un sinnúmero de irregularidades. Vio desde el pago de las constructoras a dirigentes sociales, hasta entrega de materiales, como forma de pago desde las mismas constructoras a la EGIS.

Según narra Felipe Rivera, la propia Entidad de Gestión Inmobiliaria hacía tratos con los dirigentes para asegurarse la postulación de sus respectivos comités, todo con el objetivo de acaparar una mayor cantidad de postulantes y con ello, de mayores utilidades.

Rivera comenta los principales problemas que pudo constatar: “La falta de información respecto de los subsidios de los que eran beneficiarias las personas; saber en qué consistía su reparación, porque la gente firmaba lo que le decía la presidenta, o presidente del grupo. Además, hubo poca inspección, se suponía que la EGIS debía fiscalizar al menos una vez por semana todas las obras en ejecución, pero eso no pasaba, ya que existía una gran cantidad de beneficiados y poco personal de trabajo”, agrega.

En una de las visitas a Constitución, acompañando a Raquel Rolnik, Relatora Especial de la ONU, durante su paso por Chile, una de las personas damnificadas se acercó a ella para mostrarle el patio de su casa, allí le señaló un radier y dijo: “Esto es lo que puso la constructora que me iba a reparar la casa, un día dejaron de venir a trabajar porque la plata del subsidio solo les alcanzó para hacer esto”, le comentó a Rolnik quien estaba atónita ante el relato.

Surge desde los propios damnificados y desde las organizaciones sociales, la crítica hacia el rol de las EGIS, que como toda empresa busca rentabilidad. Sin embargo, está claro que la prioridad para estas fue desarrollar proyectos en grandes terrenos, construyendo muchas viviendas al mismo tiempo, lo que permitió disminuir sus costos y aumentar sus ganancias.

En este sentido, Francisco Letelier tiene una opinión tajante al respecto. Para él, el Estado no sólo entregó *boucher* para elegir una vivienda, sino que otorgó la reconstrucción a los grupos económicos.

Su diagnóstico es que, por ejemplo, en el caso de Talca, se está produciendo el “vaciamiento del centro”, sacando a la gente pobre y comprando sus terrenos en los que ya se están ejecutando millonarios proyectos inmobiliarios. “De aquí a 15 o 20 años más el centro de Talca se va a transformar en un centro de clases medias altas donde estarán los vecinos que tenían un poco más recursos, pero la gente pobre que vive en el centro y que tenía acceso a una ciudad mejor, va a salir”, afirma Letelier.

Marlene Ávila también es damnificada y vive en Talca. Ella es una de las dirigentas sociales que lideró distintas organizaciones de mujeres en esa comuna. Es amable y encantadora, toda una líder. Sabe mucho respecto de la reconstrucción y cada oportunidad que tiene la aprovecha para aprender, informarse y luchar por sus derechos, el de su familia, vecinos y amigos.

Marlene concuerda con Francisco Letelier, ya que para ella tampoco existe una reconstrucción justa y verdadera, pues el modelo está hecho para el enriquecimiento de los privados, que en el caso de Talca, han comprado grandes terrenos de alta plusvalía a bajo precio.

El sueño de la casa propia

Una opinión muy representativa es la que emite don Alfredo. Él es un adulto mayor que perdió su vivienda después del terremoto y tsunami en Constitución. Don Alfredo detalló su caso a Raquel Rolnik: “Yo postulé a una EGIS que me

ofrecía la casa soñada, el problema de la casa soñada es que otras personas la soñaron para nosotros”.

Por su parte, Ricardo Ruz da su opinión al respecto: “En general lo que hace el modelo es entregarle en todos los lugares la reconstrucción al sector privado y en aquellos lugares, como las zonas rurales, donde a ellos no les interesa hacer negocios inventaron la vivienda tipo con casas prefabricadas, lo que facilita que el mercado funcione.

Según Ruz, “la reconstrucción es un negocio para las inmobiliarias y para las empresas. Una vivienda de 4 millones por un subsidio de 12 millones, claramente es rentable. Aquí hay un desplazamiento de la población a las zonas más altas y se ve en los planos reguladores”, explica.

Sin duda una de las aristas que más desconcierta respecto del rol de los privados en la reconstrucción son los Planes de Reconstrucción Estratégica Sustentable impulsados por compañías con presencia o interés en los territorios. Es el caso de Talcahuano, donde tuvo vital importancia Cencosud; Talca, donde ingresó la Inmobiliaria El Bosque S.A, a través del grupo Hurtado Vicuña, y también Constitución, donde la empresa Arauco, con operaciones en dicha ciudad, generó los lineamientos de la reconstrucción.

La lentitud del proceso

En todas las aldeas y territorios visitados, la opinión es que el proceso de reconstrucción ha sido más lento de lo que se esperaba, o que no ha cumplido con la expectativa generada en los primeros meses, cuando el Presidente Piñera hacía auspiciosos anuncios en la materia.

Mientras el Gobierno daba cuentas alegres que contribuían a crear falsas expectativas, los damnificados y organizaciones de la sociedad civil veían cómo el panorama en sus localidades no cambiaba.

Uno de los primeros grandes anuncios, fue la meta del Ministerio de Vivienda que se comprometió a asignar 220 mil subsidios de reconstrucción a fines de 2012, de los cuales 100 mil se entregarían durante 2011. Esos números según informa el Minvu fueron cumplidos a cabalidad.

Pero el foco en la cantidad de subsidios entregados fue mutando hacia los anuncios del porcentaje de avance en reconstrucción. Así, en el discurso del 21 de mayo de 2011 el Presidente de la República comunicaba al país que “más de la mitad de la reconstrucción está cumplida”. Junto con ello, realizó la promesa de que antes del invierno del 2012, todas las familias que vivían en aldeas recibirían sus viviendas definitivas o estarían en notable estado de avance”.

Durante la cuenta pública de 2012 el mandatario volvió a comunicar el avance de la reconstrucción, señalando que “tres cuartas partes” de la tarea estaban cumplidas y detallando que ya se habían entregado los más de 220 mil subsidios de reparación y reconstrucción comprometidos.

Un año más tarde, en mayo de 2013, durante el Mensaje Presidencial, Piñera indicó que solo faltaba un 4 por ciento para concluir el proceso de reconstrucción. El anuncio más llamativo que señaló fue que, antes de que finalizara su gobierno la reconstrucción estaría lista.

Todas estas cifras generan una percepción negativa en los damnificados, sobre todo en aquellos que cuatro años después del terremoto, continúan viviendo en una mediagua.

Para Rosa Pastén, el Gobierno siempre intentará mostrar lo mejor pero nunca llegará a ver la realidad de las personas que vivieron o siguen viviendo el terremoto. “Han solucionado algunas cosas, pero solo una parte de lo que pasó”, comenta.

“Se han mostrado en la televisión las casas que se están entregando, vimos las mismas casas de aquí de Santa Clara,- se refiere a un sector de Talcahuano- a las personas felices porque ya tienen un hogar digno, pero vamos a lo más profundo: Están dando soluciones rápidas, tirándolos donde caigan total, ellos se van a conformar con lo que les den, o sea, están viviendo precariamente. Lo que

le demos lo van a recibir, por cansancio, por agotamiento, por no seguir viviendo así”, expresó.

Por su parte, Patricia Lastra de Constitución reconoce que hay avances en la reconstrucción, pero indica que el gobierno ha entregado muchas viviendas a familias que no tuvieron daños después del terremoto. “Así muchas familias y adultos mayores quedaron sin su solución habitacional, además de abusos a causa de intereses inmobiliarios y expropiaciones injustas”, señala.

Por su parte, Carlos Bravo, Presidente de la Unión Comunal de Talca⁶³, una de las ONGs más importantes a nivel local, indicó que no cree que la reconstrucción esté lista en el tiempo prometido: “A lo mejor van a decir; ‘entregamos todos los subsidios que había que entregar’, pero a mí no me sirve un papel si no tengo construida mi casa, los anuncios tienen que ir acompañados por la realidad para que tengan validez y ha habido cosas que se han prometido y no se han cumplido, como el tema del 7 por ciento que tenía letra chica”, asegura.

Un dato importante es que según indica el Observatorio de la Reconstrucción, en el balance efectuado 14 meses después del terremoto, el único país que consideró un proceso de reconstrucción tan breve como el caso chileno fue el de Japón (1995) donde la catástrofe significó un costo del 2,5 por ciento del PIB de ese país, mientras que las pérdidas del terremoto de 2010 representan, según el propio gobierno, el 18 por ciento del PIB nacional.

⁶³ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Carlos Bravo. Presidente Unión Comunal Talca. Mayo 2012.

Un tema que también generó desconfianza en los afectados fue la dificultad de acceder a la información y el constante cambio de autoridades claves en el proceso, lo que en muchos casos significó un borrón y cuenta nueva en los proyectos, o en lo que se transmitía de estos.

Los afectados del terremoto y tsunami tuvieron que enfrentar el cambio de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, del subsecretario de la cartera, Andrés Iacobelli, la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, solo por nombrar a algunos.

Para Julia Cerda, de Constitución, el proceso de reconstrucción ha sido lento. Según sus palabras, “ha existido mucha burocracia, se han cambiado actores importantes, ‘que cambiemos el Seremi’, que cambiemos al ministro, entonces, vuelta con todo de nuevo, ha sido complicado”.

En tanto, Marlén Ávila⁶⁴, duda de que la reconstrucción alcance a estar terminada durante la administración de Sebastián Piñera: “Creo que van a pasar como 10 años más sin que se termine, pero la reconstrucción del alma sin duda que va a demorar más”, señala.

⁶⁴Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Marlén Ávila, damnificada residente de Talca. Mayo de 2012.

Pérdida de confianza

En palabras de los propios damnificados, el proceso de reconstrucción ha sido lento, ineficaz, con excesivo protagonismo del sector privado y carente de veracidad y transparencia en la entrega de soluciones.

Este crítico diagnóstico ha significado que las personas vayan perdiendo la confianza en sus dirigentes, autoridades locales y nacionales, además de no creer en las fechas que promueve el gobierno.

Bárbara Orrego opina que una de las peores cosas es el daño que se les ha hecho a las instituciones. Cataloga el proceso de reconstrucción como “lento y cruel”, debido al maltrato, que a su juicio, se les ha dado a los damnificados.

Otro punto que aclara es la pérdida de confianza en el Serviú, “¿Qué confianza tengo si voy a comprar un terreno y en 15 años más me lo van a expropiar? ¿Me van a sacar y van a volver a vender ese terreno?; ¿Qué confianza tienes en las instituciones hoy día? Ninguna. Se perdieron todas”, indica Bárbara.

Por su parte, Ricardo Ruz evalúa la reconstrucción como un proceso enfocado en dividir a la población, que se transformó en una pugna política entre partidos y no en la búsqueda de soluciones para la población.

Durante todo este tiempo, se ha generado una serie de frustraciones, ya que se ve cómo el tiempo de permanencia en las aldeas se alargó más allá de lo esperado. Sin embargo, las esperanzas de abandonar la aldea continúan con vida, María Garrido cuenta que su principal motivación para salir de El Molino es dejar atrás el hacinamiento y la pobreza en que los dejó el terremoto.

Para Ricardo Ruz, en muchos casos se puede ver que los damnificados se niegan a abandonar los campamentos debido a que mucha gente teme que al irse perderá su oportunidad de contar con una solución definitiva.

“Si la gente se va de los campamentos va a perder la organización y el foco de presión que tiene. Pierden pan y pedazo porque el gobierno se ha centrado en las aldeas y no reconoce que más del 90 por ciento de los damnificados están fuera de ellas, entonces al ser visibilizados los campamentos como el problema, cuando estos se terminen de dismantelar, se acabó el problema. Eso es lo que pretende el gobierno”, indica Ruz.

En Constitución, Waldo Chaparro también muestra su descontento y desconfianza: “Yo le di mi voto al gobierno de Piñera y me decepcionó completamente. Pensé que sería mejor, pero acá se arreglan los que están arriba y a nosotros nos dejaron igual”. Waldo se desencantó de las autoridades.

También existe la sensación de que todos los avances en materia de reconstrucción se han conseguido gracias al trabajo y acción de movimientos sociales surgidos tras el terremoto.

En palabras de Francisco Letelier: “Si el gobierno de Piñera dice que esta es su forma de enfrentar una catástrofe, creo que tiene mucho que aprender todavía. Todas las experiencias internacionales, todas, dicen: haga institucionalidad, políticas públicas específicas, creé instituciones, recursos específicos y acá nada de eso ocurrió”

Una mirada desde los Derechos Humanos

El proceso de reconstrucción, las condiciones en que viven, o vivieron los afectados por el terremoto y tsunami y las críticas respecto de las decisiones que el gobierno tomó en esta materia, también han sido objeto de análisis desde la perspectiva de los derechos humanos.

La preocupación apunta a si se están respetando o no los derechos de los damnificados, que son precisamente aquellas personas que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad antes del desastre.

Haciéndose cargo de esta preocupación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) elaboró el informe denominado “*27 F Estudio sobre la Reconstrucción post terremoto desde una perspectiva de derechos humanos*”,

primera parte, analiza las acciones realizadas por el Estado en materia de reconstrucción.

Según indica el informe, “Los desastres naturales afectan los derechos humanos que los Estados están en la obligación de garantizar” por lo que existiría un mayor riesgo de violación de estos mismos derechos cuando los damnificados no pueden regresar a sus viviendas ni acceder a una nueva después de ocurrido el desastre.

El estudio del INDH deja claro que es obligación de los Estados que se ven enfrentados a una catástrofe garantizar el derecho a la no discriminación, a la consulta y participación; a la integridad de las personas; a la libertad de tránsito, a la salud y asistencia médica; a la alimentación; a la vivienda; a la educación y al trabajo, entre otros resguardos que apuntan a la protección de los demás derechos económicos, sociales y culturales.

Reconstrucción parcial

Una de las observaciones que surgen desde la ciudadanía, es que el gobierno de Sebastián Piñera tuvo una visión de la reconstrucción centrada en lo material y no en la restauración de las comunidades.

La carencia y la dificultad para contar con las condiciones mínimas de una vivienda digna se hicieron presentes desde el primer día. Pamela Monsalve⁶⁵ de la aldea Coihueco de Penco recuerda que cuando llegó a la aldea no había agua ni

⁶⁵ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Pamela Monsalve residente en aldea Coihueco de Penco. Diciembre 2011.

baños, por lo que necesitaban acarrear agua en baldes. Su situación se hizo más compleja ya que pasado un poco más de un año, fue madre.

Otro de los aspectos que señala el informe del INDH, es que al no generarse institucionalidad especial para enfrentar la reconstrucción y “considerando la lenta gestión estatal y las debilidades del servicio público la reconstrucción podría demorar mucho más que los cuatro años señalados”.

El INDH realizó además su *Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile, 2013*, donde volvió a centrar su atención en la reconstrucción, como una de las situaciones que podría vulnerar los derechos humanos.

Una de las conclusiones de este documento es que “los habitantes perciben que la compensación ofrecida por el Estado no les permite adquirir una nueva vivienda en el entorno de sus barrios, obligándoles a desplazarse hacia nuevas áreas de la periferia, más alejadas que su ubicación presente.

En el caso particular de las aldeas de emergencia, el Instituto reconoce que aún hay problemas en el acceso a servicios, las condiciones de habitabilidad, el acceso preferente a grupos vulnerables y la ubicación adecuada.

A pesar de ello, la mayor preocupación de los damnificados es respecto a la seguridad de la tenencia, lo que a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, “no se relaciona con el hecho de residir en un hábitat provisorio, sino con el logro posterior de una vivienda definitiva”.

Sin embargo, ante la lentitud y confusión de los servicios estatales y privados en la situación de emergencia, contrasta la capacidad de organización de los/as habitantes de las aldeas, que toman iniciativas para exigir tales servicios y/o desarrollar alternativas propias.

Marlén Ávila es un ejemplo de esto. Ella y sus vecinos al ver que no les llegaba ningún tipo de ayuda decidieron apoyarse mutuamente e incluso en reiteradas ocasiones se tomaron las calles para llamar la atención principalmente del alcalde. Ella cuenta: “Yo más o menos conocía las necesidades de la gente, de mis vecinos entonces empezamos a organizarnos en las noches. Me acuerdo que lo primero que compré fueron pitos y cuando había una emergencia lo tocaban”.

Recuerda que a pesar de que su barrio, *Chorrillos*, fue uno de los más lastimados, nadie acudió en su ayuda “pasaban los camiones cooperación al regimiento y a nosotros nada. Hasta que un día llegó el alcalde y nos dijo que éramos personas que no teníamos necesidades, por eso no nos daban ayuda”, afirma.

Otro de los tópicos analizados por INDH fue las condiciones de habitabilidad en que quedaron los afectados por el terremoto. La respuesta a la emergencia fue la utilización de mediaguas. La conclusión es que “además de ser espacios insuficientes para sus habitantes, puede derivar en riesgos de la calidad material, desprotegiendo a las personas”.

A pesar del reducido espacio, las comunidades han participado o ideado diversas iniciativas para conseguir mejor aislamiento o bien, ampliar lo que debía ser su vivienda de emergencia.

Julia Cerda de la “aldea” Antofa de Constitución, cuenta que en su campamento: “La gente se preocupó de vivir mejor, de arreglar sus mediaguas. Aprovechamos todos los bonos habidos y por haber. No nos quedamos sentados esperando a que nos llegara todo fácil, porque tampoco es bueno acostumbrar a la gente a floja”, señala.

La vida en una aldea representa un gran esfuerzo de voluntad y empeño entre las personas que no se conocían de antemano. Este esfuerzo exige también altos gastos, especialmente para la electricidad, que por su instalación provisoria puede resultar de mala calidad que incluso puede provocar el pago de facturas elevadas.

Benilde Gutiérrez de la “aldea” Coihueco, de Penco, agrega que antes en su casa pagaba 25 mil pesos de luz como máximo, pero que una vez en la mediagua lo mínimo que llegó a pagar fueron 30 mil pesos.

Por su parte, Kimberly Monsalve, del mismo campamento, indica que a raíz de estas cuentas recibieron en la aldea la visita de la compañía de electricidad con la promesa de que al mes siguiente ellos les entregarían una solución; sin embargo, los descuentos otorgados fueron de 190 pesos en promedio.

A través de este diagnóstico el INDH constata que la vulneración del derecho a la vivienda adecuada, sobre todo en mujeres, adultos mayores,

personas con discapacidad, debido al escaso equipamiento de las viviendas sociales. También a los jóvenes, quienes no necesariamente tienen la capacidad de pago o el interés de acceder a una vivienda.

Finalmente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoce la falta de información y la situación de desventaja frente a las autoridades que sienten las y los habitantes de asentamientos precarios, situación que se agudizaría en momentos de erradicación de campamentos.

Liderazgos amenazadores

El *informe 27 F Estudio sobre la Reconstrucción post terremoto desde una perspectiva de derechos humanos*, reconoce la existencia de *mobbing*⁶⁶ hacia algunos dirigentes ligados al proceso de recuperación post terremoto.

Lorena Arce es profesora y desde que nació vive en Dichato. Ella también perdió su vivienda ubicada en pleno borde costero tras el tsunami, pero decidió no irse a vivir a la aldea y arrendó una casa junto a su pareja e hijos. Ella es una de las personas que se ha sentido víctima de *mobbing*.

⁶⁶ Término inglés que se refiere al acoso laboral.

A pesar de que Lorena tuvo acceso a una mediagua en la “aldea” El Molino, prefirió instalarla en la parte baja de la ciudad, antes que irse al campamento e incluso previo a arrendar.

“Si miras esta casa, esto no es más grande que una mediagua, pero tienes un entorno en el que estás más tranquila, pero estar viviendo ahí donde la gente está contaminada, psicológicamente mal, presionada, está hacinada, pelean. Más encima hay personas con muy malos valores, de muy malas costumbres y la otra es sálvate cómo puedas. Si tú criticas la reconstrucción y ellos dicen que las casas están buenas entonces tú les estás haciendo un mal por lo tanto te van a venir a atacar cómo sea. Ahí sale la miseria y los valores de las personas, ahí viste quien robaba y también, quién nunca tomó nada. Son situaciones extremas”, reflexiona Lorena.

Con una historia previa de liderazgo sindical, en el Liceo de la Asunción en Dichato, esta mujer cuenta que siempre estuvo preocupada por mejorar su localidad.

Cuando comenzaron a aparecer las soluciones post terremoto, entre ellos un plan de mitigación que contemplaba la expropiación del borde costero, comenzó a trabajar e informarse respecto a en qué consistía el proceso de reconstrucción.

Su fuerte liderazgo la llevó a formar el grupo Asamblea de Dichato “con el objetivo de contribuir en la formación de un país mucho más justo, solidario y contra el modelo neoliberal que genera tremendas desigualdades sociales”, explica Lorena Arce.

Ella también es miembro del ya mencionado Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, que involucra a las regiones más afectadas por el terremoto y tiene entre sus fundamentos, estar constantemente fiscalizando el proceso de reconstrucción.

Las motivaciones de Lorena por participar activamente de la reconstrucción son varias, sin embargo la mueve el deseo de que “se haga justa y participativa, que se respeten los derechos humanos que han sido violados, porque si uno no se moviliza, no consigue soluciones”, afirma.

Una de las consecuencias del trabajo realizado es que Lorena siente ser víctima de persecución política. “He colocado recursos preventivos, hemos sido llevados presos, me han parteado por cosas mínimas y hasta me intervinieron los teléfonos”, cuenta.

Esta dirigente narra algunos de los hechos que le han sucedido: “Tuvimos un robo que fue en esta casa. Se llevaron dos notebooks, tres agendas donde yo tenía direcciones del extranjero, de equipos asesores, de profesionales, de dirigentes, de pobladores, de toda la gente que uno va conociendo y muchos

documentos. Los notebooks que ocupaba yo se los llevaron pero no el computador de los niños, por lo tanto, ellos sabían dónde estaba la información. No me robaron plata, lo único extra fue el *play station* de mi hijo que tiene que haberles gustado”, cuenta Loreнна.

Para ella el proceso de reconstrucción ha sido lento, ineficaz y con muchos problemas de orgánica interna. Más allá de lo que ha experimentado, se muestra defraudada de que “con todos los temblores que hay en Chile, las costas de nuestro país ni siquiera cuenten con un refugio comunitario, un lugar donde se pueda recurrir los primeros días después de una tragedia”, expresa.

Loreнна es dura en su análisis: “el Estado ha sido ineficiente, ineficaz e incapaz de hacer gestión y es un tema que trasciende al gobierno de turno”. Para ella, faltan políticas de Estado que permitan enfrentar este tipo de catástrofes de una mejor manera.

Por otro lado, Bárbara Orrego de Chiguayante, también acusa ser testigo del acoso y hostigamiento, pero no directamente a ella sino que a sus vecinos. Afirma que tuvieron que poner un recurso de protección porque comenzaron a recibir llamadas telefónicas de que si las personas no firmaban para ceder su departamento al Serviu se iban a quedar en la calle.

“La gente se empezó a enfermar y a tener miedo. Por más abogados que les traía, era el Serviu el que mandaba, éramos más de 300 familias pero fueron firmando de a poco. El 27 de febrero de 2012 pusimos un recurso de protección

porque; ¿Cómo crees tú que queda la vecina? Es volver al terremoto, al susto, es lo más cruel que hizo el gobierno: jugar con el dolor de la gente, aprovecharse de este momento para tomar la oportunidad”, señala Bárbara.

La dirigente concluye: “Aquí son muchas problemáticas, es más que la vivienda. Se han vulnerado todos los derechos. Aparte de perder tu casa, de despojarte de tu hogar, la gente se va enferma, no quiere nada más”.

La vivienda adecuada

Una vivienda adecuada no solo se refiere a disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que apunta a la posibilidad de acceder a un hogar y a una comunidad seguras que proporcionen dignidad, salud física y mental.

Este derecho es considerado como la puerta de acceso a otras garantías, derecho a la familia, a la seguridad personal, a la salud, entre otros aspectos, que en definitiva permiten garantizar el derecho a la vida.

En esta dirección, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), que en su artículo 11 establece: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”.

Por lo tanto, los países que suscriben a este acuerdo, como es el caso de Chile, deben garantizar el cumplimiento de este, poniendo atención en los grupos más vulnerables de la sociedad.

Algunos de los elementos que se toman en cuenta para considerar una vivienda como adecuada son: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; accesibilidad; lugar y adecuación cultural.

Sin embargo, según el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, de agosto de 2011, la experiencia muestra que los Estados que se han enfrentado a procesos de reconstrucción, se han limitado a restituir estructuras físicas y propiedad privada, lo que en algunos casos tuvo efectos perjudiciales para las víctimas de los desastres. No se ha aprovechado la oportunidad para reparar las desigualdades, especialmente mejorando la seguridad en la tenencia que brinda un proceso de reconstrucción.

La Relatora visitó Chile durante abril de 2012, invitada por el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa y el Gobierno. Ella quiso conocer el proceso de reconstrucción, saber cuáles eran las tareas pendientes y poner el tema en la agenda pública puesto que, como señala, “desde que llegué me di cuenta que el proceso de reconstrucción no ha terminado”.

En su paso por Constitución, Raquel Rolnik tuvo la oportunidad de visitar la aldea Antofa y el sector La Poza, acompañada de dirigentes sociales y

pobladores. Explicó a los vecinos en qué consiste el derecho a la vivienda adecuada y escuchó consultas de algunos damnificados, quienes angustiados no conocían cuál sería su solución definitiva, ni cuando esta sería ejecutada.

La opinión de la relatora fue clara: “El proceso de reconstrucción no está finalizado, las personas aún no saben si tendrán una solución habitacional definitiva y por eso prefieren seguir en las aldeas y esperar hasta que se termine la ayuda puntual que se les está ofreciendo”, indica.

Modelo de exportación

Raquel Rolnik señala además que las políticas actuales de vivienda no se condicen con la complejidad de la reconstrucción a nivel país y que aún existe un gran trabajo por realizar.

Después de su paso por Chile, en agosto de 2012 Rolnik elaboró un nuevo *Informe Sobre Vivienda Adecuada Como Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado*. En este analiza el paradigma preponderante de las políticas de vivienda, centradas en el financiamiento como principal medio de fomento de la adquisición de estas.

En el documento concluye que “la plena realización del derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación, no puede promoverse exclusivamente con mecanismos financieros, sino que requiere políticas e intervenciones del Estado en materia de viviendas más amplias”. Raquel Rolnik enfatiza en que es necesario

abandonar las prácticas centradas en el financiamiento y adoptar un enfoque basado en los derechos humanos.

En este informe la Relatoría analizó acuciosamente las políticas habitacionales chilenas, basadas en las donaciones y subsidios de capital. Este modelo fue ampliamente exportado a otros países de Latinoamérica debido a que da cobertura a familias vulnerables a través del traspaso del suministro de viviendas al sector privado; considerado más eficiente que el Estado.

Sin embargo, al entregar esta tarea al sector inmobiliario se produce la falta de planificación del uso de la tierra y la ampliación de los límites de las ciudades bajo el supuesto erróneo, de que el mercado funciona libremente y contribuye de forma automática a brindar el acceso a una vivienda adecuada.

Para la relatora, las viviendas construidas entre 1978 y 2000 se concentraron en sitios periféricos carentes de infraestructura, servicios públicos y oportunidades de empleo.

El resultado de la Política de Vivienda Social chilena aumentó la disparidad de acceso a los servicios urbanos y empeoró las condiciones de vida de las personas.

Ejemplo de las consecuencias de esta política es Patricia Lastra de Constitución. Como residente del Cerro O'Higgins, tiene claro que su departamento, entregado por el SERVIU, estaba mal construido.

Para Patricia la calidad de las viviendas que se están entregando por motivo de la reconstrucción, "es mala". "Hay obras mal construidas, por el simple afán del gobierno de cumplir con las cifras. A aquellos tan llamados los más necesitados de la sociedad nos están entregando urnas con ventanas. Me pregunto de qué escuela de ingeniería se graduaron estos profesionales," señala.

Raquel Rolnik es clara: "Las políticas de financiación de la vivienda discriminan con frecuencia a los pobres, que deben pagar precios mucho más altos por los servicios financieros", llevándolos al endeudamiento.

Abordando la misma preocupación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su estudio de 2012 a la vivienda adecuada, destacó que "en el modelo subsidiario actual, la vivienda no se considera como un derecho sino que como una mercancía cuya calidad depende de los recursos financieros involucrados".

La definición anterior está ligada al tipo de vivienda subsidia el Estado de Chile: una construcción de bajo costo, instalada en un suelo posible de pagar.

A raíz de este análisis es posible observar que con el objetivo de disminuir el déficit de casas post terremoto, y en general, la política habitacional del Estado

de Chile ha descuidado aspectos fundamentales a la hora de instalar viviendas, entre ellos, la localización.

A pesar de estos profundos diagnósticos, la política habitacional de Chile continúa siendo la misma que durante la década de los 80 y 90 generó tanta segregación, focos de pobreza, hacinamiento, mala conectividad y falta de acceso a bienes públicos urbanos.

Es este mismo modelo que se utilizó para diseñar el plan de reconstrucción, por lo tanto, bajo el mismo prisma se entregarán las soluciones definitivas a los miles de damnificados.

CAPÍTULO VI

A cuatro años del terremoto: El balance de la ciudadanía

El miércoles 11 de diciembre de 2013 organizaciones de damnificados del terremoto, junto a Jorge Larenas, director del Instituto de la vivienda de la Universidad de Chile y Walter Imilan, académico, se reunieron con los parlamentarios, Giorgio Jackson, Carlos Montes y Maya Fernández en el ex Congreso Nacional para presentar un balance del programa de reconstrucción y vivienda social.

Esta evaluación es contrastada con los objetivos contenidos en el Plan de Reconstrucción de gobierno Sebastián Piñera, según los resultados de los Informes post terremoto elaborados por ONG Surmaule y el Observatorio de la Reconstrucción, en el marco del proyecto Ciudadanía y Territorio apoyado por la Unión Europea.

Una de las conclusiones de estas organizaciones es que la participación ciudadana se encuentra en su nivel más básico ya que fue entendida como la simple posibilidad de elegir una vivienda.

Además, indica que el modelo de reconstrucción ha profundizado los procesos de segregación, siguiendo con la pérdida del tejido social que la política habitacional y urbana venía produciendo.

Un tercer aspecto señala que se ha olvidado al sector rural y con ello se ha precarizado la vida en el campo, debido a la concentración de la política habitacional en los sectores urbanos.

Asimismo, es posible observar que la reconstrucción ha sido un proceso desarticulado, donde cada instrumento del Plan Nacional actúa de forma separada. Según el balance de estas organizaciones se evidencia que a nivel de barrios se produjo la concentración de los esfuerzos en las aldeas y condominios sociales, que no representan más del 10 por ciento del total de damnificados.

Además se observó la desconcentración y no la descentralización del proceso de reconstrucción pues si bien se entregaron mayores responsabilidades a regiones y comunas, no se otorgaron recursos, atribuciones ni capacidades.

A juicio de Surmaule; el Observatorio de la Reconstrucción y el Observatorio de Vivienda y Políticas Públicas: Ciudadanía y Territorio, “no ha existido un proceso de fortalecimiento de los niveles regionales ni descentralización en el sentido de vincular atribuciones de planificación y ejecución presupuestaria. El rol del sector privado ha sido mucho más potenciado que el del estado a nivel regional y local”.

Aún quedan tareas pendientes

Para estas organizaciones el modelo de reconstrucción intensificó los procesos de segregación urbana y territorial; perjudicó a los damnificados de los y se centró en dar “soluciones individuales para problemas individuales”.

Concluyen que en términos de reconstrucción de viviendas, del total de hogares dañados, considerando aquellos recuperables e irrecuperables según la ONEMI, se dio cobertura solo al 58,8 por ciento de familias que resultaron afectadas.

En cuanto a la reposición de viviendas irrecuperables, este documento cifra el avance en un 71,1 por ciento, mientras que indica que el porcentaje de subsidios entregados para reconstrucción en sitio propio es de un 13,5 por ciento, versus en 86,5 por ciento equivalente al porcentaje de subsidios para adquisición de viviendas.

En el ámbito de la reconstrucción de barrios, que atiende a los damnificados de aldeas y condominios sociales, la evaluación de estas organizaciones indica que la cobertura del programa sobre el total de damnificados hábiles de subsidio con vivienda irre recuperable es solo de un 9,2 por ciento.

Mientras que en el eje de análisis de los denominados Planes Maestros, pieza fundamental del programa de reconstrucción urbana y patrimonial, de los 371 proyectos formulados, se habrían ejecutado solo 99 lo que corresponde al 26,6 por ciento. Como ejemplo de esto se afirma que en el caso de los planes de

reconstrucción del borde costero de la región del Bío-Bío, PRBC18. De los 298 proyectos formulados sólo se han ejecutado 18.

Estos porcentajes se encuentran muy por debajo de los avances comunicados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera quien durante octubre de 2013, mientras se desarrollaba la reunión anual de las máximas autoridades de Vivienda y Urbanismo de América Latina y El Caribe, indicó que “De las 222 mil viviendas destruidas por el terremoto y maremoto, el 98 por ciento de ellas están reconstruidas, habitadas por familias chilenas que han cumplido así el sueño de la casa propia, o en pleno proceso de reconstrucción”.

Según Carolina Manríquez⁶⁷, damnificada de Constitución, miembro del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, y damnificada de Constitución, los números del Gobierno no son reales puesto que si bien hay avances, aún existen muchos casos pendientes sobre todo para aquellos damnificados de sitio residente. “Lo único que logran con estas cifras es confundir a la población”, sentenció.

⁶⁷ Entrevista realizada para esta Memoria de Título a Carolina Manríquez, damnificada residente en Constitución. Octubre de 2013.

CAPÍTULO VII

Lecciones y desafíos

“Mientras que por ‘arriba’ se proponen grandes ideas para la reconstrucción (...) se dan cifras y nuevos plazos; por ‘abajo’ las miles de personas damnificadas han permanecido desamparadas. Poca y mala información, deficiente y a veces indigna atención, plazos que no se cumplen, etc. (...) El ‘sentido de urgencia’ del que habla el Presidente de la República y la pasión que envolvió el esfuerzo estatal por rescatar a los mineros, no se ha visto en los barrios afectados. No se ha percibido un Estado acogedor”.

Francisco Letelier, en su artículo: “Los pasos en falso de la reconstrucción”.

Cuatro años después del terremoto, y al terminar el gobierno de Sebastián Piñera, Chile aún tiene desafíos pendientes y lecciones que aprender, no solo para dar respuesta a los damnificados del 27F que aún esperan la reconstrucción, sino para las futuras víctimas de los desastres naturales que continuarán ocurriendo en nuestro país.

Una de las lecciones más claras es que este tipo de catástrofes no afectan a todos por igual. Los más perjudicados son aquellas personas que previo al desastre ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Según plantea Yafza Reyes, magíster en Estudios de Género y Cultura, en su tesis *Violencias Urbanas hacia las mujeres post terremoto/tsunami*: “El plan de reconstrucción debe considerar medidas de mitigación que reduzcan vulnerabilidades presentes y futuras y, sobre todo, que eviten reconstruir las falencias heredadas del pasado.

Resulta curioso que a pesar de que constantemente ocurren este tipo de tragedias, parece no existir una memoria histórica en cuanto a políticas públicas ni al actuar de la población cuando se ve enfrentada a un nuevo desastre natural.

Esta amnesia se vio reflejada en la reacción de las autoridades inmediatamente después de ocurrido el terremoto: ante la magnitud del sismo se vieron superadas al punto de no emitir la necesaria alerta de tsunami.

Además, al no generarse institucionalidad específica para enfrentar esta compleja tarea, se contribuyó a preservar el modelo imperante, donde el Gobierno es el responsable de definir ante cada evento, qué métodos utilizará para asistir a la población más afectada y desde dónde obtendrá el financiamiento.

Considerando la nutrida historia sísmica del país, y por ende, los procesos de reconstrucción desarrollados, resulta imposible no comparar con experiencias anteriores y ver cómo antes del terremoto de 1985 se ejecutaron propuestas integrales cuya mirada fue tan a largo plazo que sus medidas perduran hasta hoy.

Un ejemplo emblemático en este sentido fue el terremoto de Chillán del 24 de enero de 1939. A solo un mes de asumir como Presidente, Pedro Aguirre

Cerda debió enfrentar esta tragedia que según datos de la época dejó un saldo de 30 mil fallecidos y varias ciudades del sur completamente destruidas.

El modelo impulsado por Aguirre Cerda fue insertar la reconstrucción en un plan basado en su concepción de lo que debía ser el desarrollo futuro de Chile; se estableció nueva institucionalidad con importante rol del Estado, a través de la creación de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, encargada de la reparación de viviendas, obras de emergencia y obras públicas y se fundó la Corporación de Fomento de Producción (Corfo) vital en el posterior crecimiento industrial del país.

Según explica el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, en su artículo *Terremotos: ¿Una oportunidad para avanzar en la agenda de cada gobierno?*⁶⁸, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio se hizo responsable de la edificación de viviendas a través de préstamos a los damnificados para reconstruir y reparar edificios, o construyendo ella misma a través de terceros. Además, desarrolló obras de emergencia como pabellones y barracas para albergar a la población, y también servicios públicos y municipales de la zona afectada.

Mientras que desde la Corporación de Fomento (Corfo), se planificó la creación de la Empresa Nacional de Electricidad para llegar con energía eléctrica adonde no existía interés por parte del sector privado⁶⁹.

⁶⁸ Artículo publicado en Revista Anales de la Universidad de Chile. Terre Mare Moto.(2011)

⁶⁹ Desde la Corfo también se impulsó la creación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)

Aprender de la experiencia

Sin embargo, el plan de 2010 utilizó los mismos elementos vigentes en tiempos normales, que con algunas modificaciones; centró la reconstrucción en la recuperación de infraestructura y a través de la ley 20.444 creó el Fondo Nacional de Reconstrucción que simplemente buscó incentivar el apoyo del sector privado al financiamiento de la reconstrucción, sin entregar mayor importancia al rol del Estado.

Se dejó pasar la gran oportunidad de dejar un legado al país, como sí ocurrió luego del terremoto de 1939.

Según el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, a través de su documento *Plan de Reconstrucción*: “Es necesario comprender que un Plan de Reconstrucción no es un programa de construcción de unidades de vivienda, importantes por cierto. (...) debe considerar en forma integrada la reconstrucción de los diversos soportes que se ocupan de proveer los distintos satisfactores de necesidades humanas, tales como alimentación, empleo, salud, educación, servicios públicos, comercio, recreación, entre otras. Implica la mirada hacia el futuro de las actuales generaciones y de las venideras, mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad del territorio, por tanto, conlleva la participación de las comunidades, pues se trata de la regeneración de un «Plan de Vida».”

Además se generó la visión de que el principal problema radicaba en las aldeas. Esta es una mirada errónea, considerando que de los 222 mil 428

subsidios que otorgó el gobierno, sólo 4 mil 350 familias residían o residen en alguna de las 107 aldeas instaladas, esto representa el 1,95 por ciento del total de subsidios entregados.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de enfrentar una nueva tragedia es el contar con la real participación de la ciudadanía; que esta no solo sea importante en el discurso sino también en la acción, escuchando sus propuestas y trabajando para reconstruir sus comunidades.

La dura estadía en las aldeas de emergencia; con dificultades para acceder a servicios básicos, problemas de seguridad y sin garantizar el derecho a la vivienda adecuada, se hizo más difícil ante la incertidumbre de los damnificados respecto de cuándo y cuál sería la solución definitiva a la que podrían acceder. Esa situación habría mejorado al trabajar directamente con las comunidades afectadas.

Para Lorena Arce, las soluciones que se entregan en su localidad, Dichato, no son más que “mediaguas enchuladas”, mientras que para Raquel Rolnik, “estas casas no cumplen con ningún parámetro de vivienda adecuada”.

La generación de falsas expectativas es otro de los problemas que deben enfrentar los damnificados, quienes constantemente son testigos de los aplazamientos en la entrega de sus soluciones, contrastados con los auspicios anuncios respecto de los avances de la reconstrucción y con algunas de las decisiones tomadas por el ejecutivo como la inauguración del memorial a las víctimas del 27F en Concepción.

Este monumento consiste en ocho torres de hormigón de 23 metros de altura donde cada una representa una temática específica, como las localidades afectadas, los nombres de los fallecidos, entre otras. Esta obra significó una inversión de casi 2 mil millones de pesos.

La opinión de organizaciones sociales y expertos es clara: el Estado no aprovechó la oportunidad de reconstruir mejor; entregó mucha responsabilidad al sector privado y con la poca capacidad de fiscalización, resulta muy difícil que los damnificados reciban una vivienda de mejor calidad o emplazadas en una mejor ubicación de la ciudad.

Por lo anterior, el desastre es percibido como una oportunidad para los empresarios, quienes ante las deficiencias e incapacidades del aparato estatal, tienen un rol fundamental en el proceso de reconstrucción, y no para los miles de damnificados, para quienes su solución se pensó desde el mismo modelo que desde 1978 ha desplazado a los más pobres hacia la periferia.

Según la relatora Especial para el derecho a la vivienda adecuada, Raquel Rolnik, este tipo de modelo “ha descuidado el aspecto de la habitabilidad de la vivienda. Muchas veces los hogares no sólo estaban mal situados sino que también eran muy pequeños o de muy mala calidad y con posibilidades limitadas de mejora”.

A pesar de todos estos conflictos sería injusto decir que no ha habido construcción o reparación de viviendas. Según el Ministerio de Vivienda en su último informe de avance en la entrega de soluciones habitacionales de diciembre

de 2013, se han entregado 89 mil casas nuevas y 104 mil reparaciones, quedando en construcción 28 mil viviendas, de las cuales 26 mil son construcciones nuevas.

A cuatro años del terremoto aún quedan tareas por resolver: cerca de 30 mil familias damnificadas continúan a la espera de la reconstrucción, bajo la interrogante de cuándo llegarán sus soluciones y cuál será la calidad de las viviendas recibidas.

ENTREVISTADOS

- **Ampuero, Sara**

Habitante de Dichato damnificada por el terremoto de febrero de 2010.

Entrevista realizada en octubre de 2011.

- **Arce, Lorena**

Habitante de Dichato, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en febrero de 2013.

- **Ávila, Marlén**

Habitante de Talca, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en mayo de 2012

- **Bravo, Carlos**

Presidente de la Unión Comunal de Talca.

Entrevista realizada en mayo de 2012

- **Campos, Aida**

Habitante de Coronel, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en noviembre de 2012.

- **Cerda, Julia**

Habitante de Constitución, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011.

- **Chaparro, Waldo**

Habitante de Constitución, damnificado por el terremoto y tsunami de febrero de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011

- **Cofré, Erica**

Habitante de Dichato, damnificada por el terremoto y tsunami de febrero de 2010. Entrevista realizada en octubre de 2011

Entrevista realizada en octubre de 2011.

- **Contreras, Aracelli**

Habitante de Constitución, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011.

- **Garrido, María**

Habitante de Dichato, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en abril de 2013.

- **Gutiérrez, Benilde**

Habitante de Penco, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011.

- **Gutiérrez, Nancy**

Habitante de Penco, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011

- **Jacqueline***

Habitante de Constitución, damnificado por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011
- **Jara, Segundo**

Habitante de Quile, Región del Bío-Bío.

Entrevista realizada en febrero de 2011
- **Lastra, Patricia**

Habitante de Constitución, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2013
- **Letelier, Francisco**

Sociólogo, miembro de ONG SURMAULE

Entrevistado en mayo de 2012
- **Manríquez, Carolina**

Habitante de Constitución, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en octubre de 2013
- **Monsalve, Kimberly**

Habitante de Penco, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011
- **Monsalve, Pamela**

Habitante de Penco, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011

- **Orrego, Bárbara**

Habitante de Villa Futuro Chiguayante.

Entrevista realizada en diciembre de 2012

- **Pastén, Rosa**

Habitante de Talcahuano, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2012.

- **Parra, Ramona**

Habitante de Dichato, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010.

Entrevista realizada en marzo de 2013.

- **Patricio***

Militar.

Octubre de 2013.

- **Rivera, Felipe**

Ingeniero Constructor.

Entrevista realizada el 30 de septiembre de 2013.

- **Rolnik, Raquel**

Relatora Especial del derecho a la vivienda adecuada

Entrevista realizada en abril de 2012

- **Ruz, Ricardo**

Habitante de Dichato, damnificado por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en febrero de 2013

- **Schleyer, Yasna**

Psicóloga

Entrevista realizada en septiembre de 2013

- **Tapia, Noelia**

Habitante de Dichato, damnificada por el terremoto y tsunami de febrero de 2010.

Entrevista realizada en octubre de 2011.

- **Torrealba, María Gabriela**

Habitante de Penco, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011

- **Torres, Jacqueline**

Habitante de Penco, damnificada por el terremoto y tsunami de 2010

Entrevista realizada en diciembre de 2011

*Los nombres que aparecen con este símbolo no quisieron revelar sus apellidos por diferentes razones.

BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- CARES, C., IMILAN. W., VERGARA, P., (2011) “Reconstrucción (es) sociedad civil” Instituto de la Vivienda. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile.
- LETELIER, F., BOYCO, P., (2011) “Talca post terremoto, una ciudad en disputa”. Santiago, Chile. Ediciones SUR.
- MONTECINO, S. (Com) (2011). “Terre Mare Moto”. Revista Anales de la Universidad de Chile, séptima edición. Santiago, Chile. Editorial Catalonia.

Sitios web:

- ALTO COMISIONADO de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR). (2011). Directrices operaciones del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales [en línea] <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8207.pdf?view=1> [consulta: 3 de noviembre de 2013]
- CÁMARA DE DIPUTADOS. CONGRESO DE CHILE (2012) Informe de la Comisión Investigadora sobre el seguimiento del proceso de Reconstrucción Nacional [en línea] <<http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmtipo=mandatosgraldet&prmid=22&prmtipodoc=local&prmpериodo=2010-2014> > [consulta: 15 de junio de 2013]

- CRUZ ROJA CHILENA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (2011). Diagnóstico de necesidades no cubiertas en las áreas rurales afectadas por el terremoto
http://www.cruzroja.cl/publicaciones/descarga/INFORME_CRUZ_ROJA.pdf
[consulta 12 de mayo de 2013]
- FUNDACIÓN TERRAM. (2013) Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. [en línea]
http://www.terram.cl/images/terremoto/libro_replicas-terremoto-completo.pdf
[consulta: 16 de abril de 2013]
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE). (2010) Boletín informativo del Instituto Nacional de estadísticas. Indicadores mensuales, empleo trimestral. [en línea] <<http://static.latercera.com/20100531/952795.pdf>>
[consulta: 21 de agosto de 2013]
- INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2012) “27F” Estudio sobre la reconstrucción desde una perspectiva de derechos humanos, primera parte. [en línea] <http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2012/07/informe-reconstruccion-indh.pdf> [consulta: 19 de marzo de 2013]
- INSTITUTO NACIONAL de Derechos Humanos (INDH). (2013) Situación de los derechos humanos. Informe anual [en línea]
<http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2013/12/Informe-Anual-INDH-2013-para-ISBN.pdf> [consulta: 1 de diciembre de 2013]
- INSTITUTO DE VIVIENDA. UNIVERSIDAD DE CHILE (2011). Los desplazados de la reconstrucción [en línea]

<http://reconstruccion.uchilefau.cl/2011/04/los-desplazados-de-la-reconstruccion/> [consulta: 13 de septiembre de 2012]

- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (2010) Efectos en la calidad de vida de la población afectada por el terremoto/tsunami. [en línea] <http://www.Ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-post-terremoto/documentos/informe-encuesta-post-terremoto.pdf> [consulta: 7 de agosto de 2013]

- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (2010) Plan de reconstrucción nacional. [en línea] <http://www.Ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/e60b893eb66a10139bfe68d2c6005636.pdf> [consulta: 7 de octubre de 2011]

- MINISTERIO DEL INTERIOR (2010) Listado oficial de fallecidos y desaparecidos por comuna. [en línea] http://www.interior.gob.cl/filesapp/listado_fallecidos_desaparecidos_27Feb.pdf [consulta: 16 de abril de 2013]

- MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (Minvu). (2011) Plan de reconstrucción Chile Unido Reconstruye Mejor. [en línea] http://www.minvu.cl/opensite_20111122105648.aspx [consulta: 15 de mayo de 2013]

- NACIONES UNIDAS (2010). Informe de la relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. [en línea] http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/PDF/Biblioteca/biblioteca_2010/ONU_docs/Informes_relatores/Vivienda/2010_informe_vivienda_raquel_rolnik_no_discriminacion_20_dic.pdf [consulta: 30 de agosto de 2013]

- NACIONES UNIDAS (2011). Informe de la relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación a este respecto. [en línea]

http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/PDF/Biblioteca/biblioteca_2010/ONU_docs/Informes_relatores/Vivienda/2011_informe_vivienda_raquel_rolnik_mision_bm_7_ene_ingles.pdf [consulta: 20 de julio de 2013]

- NACIONES UNIDAS (2012) *Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto* [en línea]

http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/PDF/Biblioteca/biblioteca_2010/ONU_docs/Informes_relatores/Vivienda/2011_informe_vivienda_raquel_rolnik_sumario_actores_14_feb_ingles.pdf [consulta: 10 de octubre de 2013]

- OBSERVATORIO DE LA RECONSTRUCCIÓN. (2013) Evaluación de resultados del proceso de reconstrucción. [en línea]

<http://www.observatorioreconstruccion.cl/wp-content/uploads/2013/12/Evaluaci%C3%B3n-Plan-de-Reconstrucci%C3%B3n.pdf> [consulta: 12 de diciembre de 2013]

- OBSERVATORIO DE LA RECONSTRUCCIÓN. Balance de la reconstrucción a 14 meses del terremoto del 27F y la emergencia del movimiento nacional por la reconstrucción [en línea]

<http://www.observatorioreconstruccion.cl/2011/05/balance-de-la-reconstruccion-a-14-meses-del-terremoto-del-27f-y-la-emergencia-del-movimiento-nacional-por-la-reconstruccion-justa/> [consulta: 14 de agosto de 2013]

- OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (2010). El impacto del terremoto sobre el empleo. [en línea] <http://www.oitchile.cl/pdf/10-01.pdf> [consulta: 3 de abril de 2012]
- ONU HABITAT (2010) Informe anual ONU Hábitat. [en línea] http://issuu.com/unhabitat/docs/informe_anual_2010__annual_report_2010_ [consulta: noviembre 2012]
- SERVICIO MÉDICO LEGAL (2010) El terremoto/tsunami en Chile. Una mirada a las estadísticas médico legales. [en línea] http://www.sml.cl/proyectos/estadistica/documentos/El_terremoto_Tsunami_en_Chile.pdf [consulta: 20 de septiembre de 2013]
- SERVICIO SISMOLÓGICO UNIVERSIDAD DE CHILE (2014). Sismos importantes y/o destructivos. 1570 a la fecha. [en línea] <http://www.sismologia.cl> [consulta: 24 de enero de 2014]
- SURMAULE. (2011). Informe para la relatora especial de naciones unidas para el derecho a la vivienda adecuada. [en línea] <http://www.surmaule.cl/wp-content/uploads/2013/12/Tipolog%C3%ADa-Urbana.pdf> [consulta: 15 de enero 2012]

Leyes:

- CHILE. Ministerio de Hacienda. 2010. Crea el Fondo Nacional de Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe.

Solicitud de transparencia:

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2013) Cifras de aldeas instaladas pos terremoto y tsunami en Chile hasta octubre de 2013. Solicitud de información N° CAS-2279696-P9Y4V8, realizada el 11 de septiembre de 2013 y obtenida el 22 de octubre de 2013.

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2013) Diferencia entre concepto de aldeas y campamentos. Solicitud de información CAS-2284956-J1Y1H2, realizada el 11 de septiembre de 2013 y obtenida el 22 de octubre de 2013.

Tesis:

- ORMEÑO, Héctor (2010) “Entendiendo el comportamiento cívico post terremoto”, Monografía de título, conducente al título de Ingeniero Comercial, mención economía. Monografía de título. Universidad de Santiago de Chile.

- REYES, Yafza (2011) “Violencias urbanas hacia las mujeres post terremoto/tsunami. Los desafíos de la agrupación de organizaciones de mujeres del Maule para la equidad en reconstrucción”. Tesis de Magíster en Estudios de Género y Cultura. Santiago, Chile. Universidad de Chile.

Seminarios:

- ¹CÁCERES, K. LIZAMA, M. VALERIA, N. VEGA, V. (2010) *Radios comunitarias en situación de catástrofe en la Región del Bío Bío* Seminario Investigación en Comunicación. Universidad de Chile.

ANEXOS

Tabla 1: Evaluación de acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Reconstrucción

<p style="text-align: center;">Objetivos planteados por el Plan de Reconstrucción Nacional</p>	<p style="text-align: center;">Evaluación de acuerdo a los informes territoriales post terremoto</p>
<p style="text-align: center;">Reconstrucción del tejido social y urbano devastado por el terremoto</p>	<p>El modelo de reconstrucción intensificó los procesos de segregación urbana y territorial al propiciar la salida de los pobres de zonas de mayor valor inmobiliario y su relocalización en sectores más periféricos.</p> <p>El 87 por ciento de subsidios de reconstrucción asignados en las ciudades intermedias y metropolitanas son subsidios de adquisición de viviendas, lo que implica relocalización de las familias. Esta relocalización implica también la pérdida de tejido social y los vínculos vecinales.</p>
<p style="text-align: center;">Valorización de la relación de las comunidades con la</p>	<p>El modelo de reconstrucción propició en los sectores rurales la migración rural – urbana. El 84 por ciento de los subsidios de construcción son para la adquisición</p>

<p>tierra y protección de su sentido de pertenencia</p>	<p>de viviendas, lo que implica necesariamente relocalización y en general traslado a sectores urbanos donde el mercado puede rentabilizar la inversión.</p> <p>Se suma a lo anterior la inexistencia del nivel barrio en el modelo de reconstrucción y la ausencia de programas y planes específicos para la ruralidad.</p>
<p>Protección de la identidad y patrimonio arquitectónico de las comunidades</p>	<p>No existió una institucionalidad estatal capaz de liderar el proceso de recuperación y protección del patrimonio.</p> <p>No se definieron programas pertinentes dirigidos a la recuperación del patrimonio, se actuó, en cambio, haciendo modificaciones parciales a los instrumentos existentes.</p> <p>Se observan fenómenos muy cercanos a lo que se denomina Gentrificación⁷⁰, el cual ha traído consigo graves daños en el patrimonio de las ciudades, ya que se da principalmente en barrios antiguos, que producto del deterioro y el abandono, han sido renovados y transformados.</p>
<p>Fortalecimiento de las instituciones locales y regionales y</p>	<p>Al no definir institucionalidad <i>ad-hoc</i> (centralizada y/o descentralizada), el modelo de reconstrucción presionó a la precaria institucionalidad regional y local.</p>

⁷⁰ Proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva.

<p>descentralización</p>	<p>Hablamos de procesos de desconcentración más que de descentralización, puesto que no implicaron más recursos, ni más atribuciones, ni nuevas capacidades técnicas. La lógica de descentralización del diseño del Gobierno se funda en la transferencia de funciones a estructuras sectoriales (Ministerios) y a estructuras territoriales aunque dependientes del gobierno central. Estas inconsistencias son reconocidas por los actores locales a un año de iniciado el proceso y con cierta independencia del posicionamiento político del municipio.</p>
<p>Fortalecimiento de las instituciones locales y regionales y descentralización</p>	<p>En este proceso las municipalidades más pequeñas, en generales rurales, fueron las menos habilitadas para asumir un rol importante en el proceso, quedando en una situación asimétrica respecto al mercado de la reconstrucción y los privados que actuaron en el territorio.</p> <p>Entre las debilidades que se detectan en este sentido están: falta de apoyo técnico y bajas capacidades institucionales; descoordinación entre los diferentes niveles de mando del proceso, ausencia de información en cuadros técnicos comunales y bypass a los municipios; excesivo centralismo que contribuye una</p>

	<p>mayor lentitud del proceso.</p>
<p>Empoderamiento de las comunidades como propietarias y corresponsables de su propio plan de reconstrucción</p>	<p>Siendo inexistente la escala barrio en el modelo de reconstrucción, el proceso se ha centrado en soluciones individuales para problemas individuales. El estado no ha otorgado a la comunidad, ni a sus organizaciones, un rol relevante en la reconstrucción de viviendas. La participación ciudadana es entendida por el Plan de Reconstrucción como la posibilidad de “elegir” la vivienda.</p> <p>Pese a lo anterior, los ciudadanos se han articulado para defender derechos o ser contraparte de un proceso que no tiene interés en lo colectivo.</p> <p>A nivel de planes de reconstrucción, los procesos de participación han sido muy dispares y han quedado básicamente a criterio del ejecutor o financiador (en algunos casos un gran grupo económico). En todos los casos estos procesos han tenido una duración muy breve lo que también ha dificultado la participación de la comunidad.</p> <p>Finalmente, al ser los Planes Maestros de naturaleza no vinculante, en los casos donde se ha producido participación, nada asegura que ella será incidente en las decisiones que se tomarán finalmente en el</p>

	territorio.
<p>Propiciar la reconstrucción de vivienda en el mismo sitio donde se encontraban las viviendas que fueron destruidas.</p> <p>Evitar la erradicación en los sectores rurales.</p>	<p>La lógica preponderante en el proceso de reconstrucción de viviendas ha sido la relocalización y no la radicación de las familias en los mismos lugares en que vivían antes del terremoto. Más del 80 por ciento de los subsidios asignados son para la adquisición de viviendas. No más del 15 por ciento de los damnificados podrán mantener la localización que tenían pre terremoto. Esto implica uno de los mayores procesos de migración centro – periferia y campo – ciudad que se ha producido luego de un fenómeno natural en Chile.</p> <p>La propuesta inicial de mantener la localización de las familias comenzó a ser criticada por uno de los actores con mayores influencias en la política habitacional chilena, la Cámara Chilena de la Construcción, la cual abogaba por un proceso de reconstrucción en la línea de la producción masiva y des localizada. Al mismo tiempo los autores explican que la reconstrucción en sitio propio es contradictoria con los intereses de las empresas constructoras, que operan con proyectos de gran número de unidades, lo que requiere que sean en sitio nuevo.</p>

	<p>En la zona costera, la relocalización de viviendas a partir del establecimiento de áreas de riesgo, ha implicado la construcción de viviendas en nuevas áreas urbanizables. Estas áreas en muchos casos cuentan con limitada accesibilidad, y en otros, implica profundizar procesos de segregación socio espaciales.</p>
<p>Favorecer la competencia para promover la calidad de la oferta de soluciones</p>	<p>El proceso de reconstrucción de viviendas se ha realizado en el marco de la misma política habitacional pre terremoto. Esta política tiende a la masividad y a la estandarización de las soluciones, al mismo tiempo que se concentra habitualmente en grandes empresas constructoras que contralan buena parte del mercado regional y nacional. Después del terremoto esta realidad se ha mantenido. La mayor cantidad de oferta de vivienda nueva se concentra en la periferia de las ciudades, sin mayor innovación en su diseño ni variabilidad en su metraje. Estos nuevos conjuntos, al mismo tiempo, superan en general las 300 400 unidades.</p> <p>El sector rural ha sufrido en forma aguda la dependencia del modelo de reconstrucción de la iniciativa privada, que se expresa fundamentalmente a</p>

través del actuar de EGIS y constructoras. Aquí la reconstrucción ha avanzado más lentamente, debido a que la distancia y la dispersión de los damnificados hacen poco rentable para las empresas emprender proyectos de reconstrucción, sobre todo si la demanda se refiere a la reparación de viviendas o a la reconstrucción en sitio propio.

El subsidio de autoconstrucción, destinado a facilitar las soluciones en sectores rurales donde el mercado no presentaba mayor interés, tiene a septiembre de 2013 solo 381 obras terminadas.